



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



Tesis:

**La autopuesta en peligro de las víctimas al incumplir las medidas de protección y
su repercusión en el incremento delictivo**

Autor:

Bach. Díaz Mino Jorge David Enmanuel

Asesora:

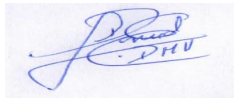
Mag. Colina Moreno Mary Isabel

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

Fecha de sustentación: 15 de marzo del 2024

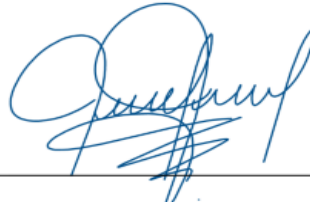
Lambayeque, 2024

Tesis denominada: “La autopuesta en peligro de las víctimas al incumplir las medidas de protección y su repercusión en el incremento delictivo”, presentada para optar por el TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO, por:



Bach. Enmanuel Díaz Jorge David Mino

Autor



Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO

Asesora

APROBADO POR:



Dr. EZEQUIEL BAUDELIO CHAVARRY CORREA
Presidente del Jurado



Mag. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
Secretario del Jurado



Mag. JOSE ELOY GAMONAL GUEVARA
Vocal del Jurado.

DEDICATORIA

A mis padres (Elisa y Werner); a mis hermanos (Marlon y Blanca); a mi sobrino (Marco Enmanuel) y a ti Sumico, por no permitirme renunciar a este sueño y ser siempre mi fortaleza y la principal razón de querer salir adelante.

A mi abuela, Mery Cárdenas López, por iluminar siempre mi camino y ser fuente de inspiración.

AGRADECIMIENTO

A mis docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; en especial a la Dra. Mary Isabel Colina Moreno, sus consejos, ayuda y colaboración fue de gran utilidad para este importante logro.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN
A C T A DE SUSTENTACIÓN PRESENCIAL N° 21-2024-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADO de: **Jorge David Enmanuel Díaz Mino**.
Siendo las 11:00 a.m. del día viernes 15 de marzo del 2024 se reunieron en la Sala de simulación de audiencias 1 de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: " ***LA AUTOPUESTA EN PELIGRO DE LAS VÍCTIMAS AL INCUMPLIR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SU REPERCUSIÓN EN EL INCREMENTO DELICTIVO***", designados por Resolución N° 144-2024-FDCP-VIRTUAL de fecha 15 de marzo del 2024, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRÉSIDENTE : Dr. EZEQUIEL BAUDELIO CHAVARRY CORREA.

SECRETARIO : Mag. CESAR VARGAS RODRIGUEZ.

VOCAL : Mag. JOSE ELOY GAMONAL GUEVARA

La tesis fue asesorada por Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO, nombrada por Resolución N°135-2022-FDCP-VIRTUAL de fecha 20 de mayo del 2022.

El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N° 144-2024-FDCP-VIRTUAL de fecha 15 de marzo del 2024.

La tesis fue presentada y sustentada por el bachiller **Jorge David Enmanuel Díaz Mino** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: APROBADO con la nota de 15 (Buena) en la escala vigesimal, mención de Regula.

Por lo que queda APTO para obtener el Título Profesional de ABOGADO, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 12 : 20 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico tomando la juramentación respectiva y suscribiendo el Acta los miembros del jurado.

Lambayeque, viernes 15 de marzo del 2024


Dr. EZEQUIEL BAUDELIO CHAVARRY CORREA
Presidente del Jurado


Mag. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
Secretario del Jurado

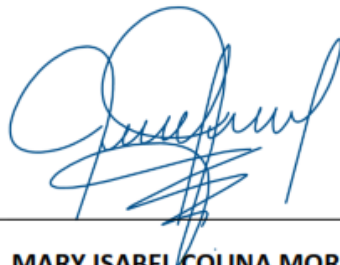

Mag. JOSE ELOY GAMONAL GUEVARA
Vocal del Jurado.

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO, Docente/ Asesor de tesis/ Revisor del trabajo de investigación del bachiller en DERECHO Jorge David Enmanuel Díaz Mino, Titulada “LA AUTOPUESTA EN PELIGRO DE LAS VÍCTIMAS AL INCUMPLIR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SU REPERCUSIÓN EN EL INCREMENTO DELICTIVO”, luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 16% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 04 de noviembre del 2022



Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO
D.N.I 40997649
ASESORA



Bach. Jorge David Enmanuel Díaz Mino

DNI: 73578768

Autor

“La autopuesta en peligro de las víctimas al incumplir las medidas de protección y su repercusión en el incremento delictivo”

INFORME DE ORIGINALIDAD

16%

INDICE DE SIMILITUD

15%

FUENTES DE INTERNET

3%

PUBLICACIONES

9%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net	Fuente de Internet	2%
2	Submitted to Universidad Cesar Vallejo	Trabajo del estudiante	2%
3	repositorio.ucv.edu.pe	Fuente de Internet	2%
4	repositorio.unprg.edu.pe	Fuente de Internet	2%
5	repositorio.uss.edu.pe	Fuente de Internet	1%
6	repositorio.unp.edu.pe	Fuente de Internet	1%
7	repositorio.unheval.edu.pe	Fuente de Internet	1%
8	repositorio.untumbes.edu.pe	Fuente de Internet	1%



Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO
D.N.I 40997649
ASESORA

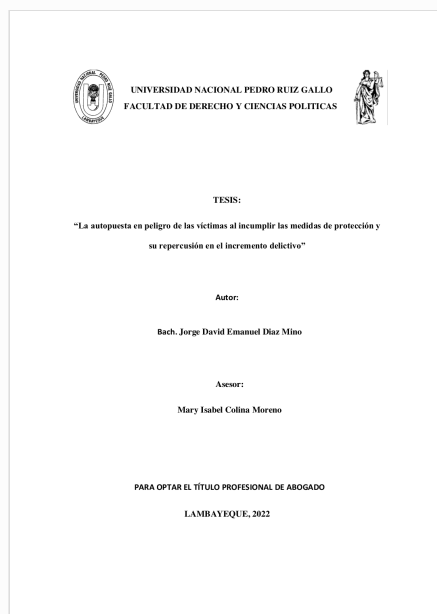


Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Jorge David Emanuel Diaz Mino
Título del ejercicio: TESIS
Título de la entrega: "La autopuesta en peligro de las víctimas al incumplir las m...
Nombre del archivo: TESIS.FINAL_1.docx
Tamaño del archivo: 1.5M
Total páginas: 62
Total de palabras: 12,197
Total de caracteres: 66,073
Fecha de entrega: 24-oct.-2022 01:03p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entre... 1934184656



Derechos de autor 2022 Turnitin. Todos los derechos reservados.

Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO
D.N.I 40997649
ASESORA

INDICE

DEDICATORIA	III
AGRADECIMIENTO	IV
INDICE DE TABLAS.....	VI
INDICE DE FIGURAS	VII
RESUMEN.....	VIII
ABSTRACT	IX
INTRODUCCION.....	1
CAPITULO I: ASPECTOS METOLOGICOS	4
1. Realidad problemática	4
CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL	16
2.1. Antecedentes históricos	16
2.2. Definiciones doctrinarias	20
2.3. Regulación legal en el Perú.....	23
2.4. Legislación comparada	28
CAPITULO III: ANALISIS Y RESULTADOS	32
3.1. Prueba de normalidad	32
3.2. En relación al objetivo general de la investigación:	33
3.3. En relación al segundo objetivo específico de la investigación:	36
3.4. Confiabilidad del instrumento	42
CAPITULO IV: CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS	43
4.1. Discusión de resultados	43
4.2. Propuesta legislativa	52
CONCLUSIONES.....	59
RECOMENDACIONES.....	61
REFERENCIAS	62

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 <i>Análisis de normalidad del Auto incumplimiento de las medidas de protección y el incremento de las tasas delictivas</i>	32
Tabla 2 <i>Correlación entre auto incumplimiento y el incremento de tasas delictivas</i>	33
Tabla 3 <i>Distribución de frecuencias respecto a las políticas nacionales e internacionales en la lucha para frenar la violencia contra la mujer</i>	34
Tabla 4 <i>Distribución de frecuencias respecto a la protección que brinda la Ley n.º 30364 a las mujeres víctimas de violencia</i>	35
Tabla 5 <i>Distribución de frecuencias respecto al tratamiento de las medidas de protección dictadas</i>	36
Tabla 6 <i>Distribución de frecuencias respecto al acompañamiento interdisciplinario adecuado a las medidas de protección brindadas a las mujeres víctimas de violencia</i>	37
Tabla 7 <i>Distribución de frecuencia respecto al auto incumplimiento de las medidas de protección por parte de las víctimas</i>	38
Tabla 8 <i>Distribución de frecuencia respecto al auto incumplimiento de las medidas de protección por parte de las víctimas obedece a un incorrecto acompañamiento estatal a dichas medidas</i>	40
Tabla 9 <i>Distribución de frecuencia respecto a la incidencia del delito previo</i>	41
Tabla 10 <i>Estadísticas de fiabilidad.....</i>	42

INDICE DE FIGURAS

<i>Figura 1. Las políticas nacionales e internacionales en la lucha para frenar la violencia contra la mujer</i>	<i>34</i>
<i>Figura 2. Protección que brinda la Ley n.° 30364 a las mujeres víctimas de violencia</i>	<i>36</i>
<i>Figura 3. Tratamiento de las medidas de protección dictadas</i>	<i>37</i>
<i>Figura 4. Acompañamiento interdisciplinario adecuado a las medidas de protección brindadas a las mujeres víctimas de violencia.....</i>	<i>38</i>
<i>Figura 5. Auto incumplimiento de las medidas de protección por parte de las víctimas.....</i>	<i>39</i>
<i>Figura 6. Auto incumplimiento de las medidas de protección por parte de las víctimas.....</i>	<i>40</i>
<i>Figura 7. Incidencia del delito previo</i>	<i>41</i>

RESUMEN

La falta de cumplimiento de las medidas de salvaguardia conlleva un riesgo tangible para las personas perjudicadas y contribuye al aumento de la actividad delictiva. Los propósitos de este estudio son analizar de forma minuciosa la correlación existente entre la exposición de las víctimas a situaciones de peligro autogenerado y el incremento de la delincuencia, identificar acciones de protección destinadas a prevenir dicha exposición y evaluar la eficacia de tales acciones. Mediante un abordaje científico y riguroso, que involucra el examen de documentos, la aplicación y realización de encuestas, se describe de manera exhaustiva el procedimiento de selección de la muestra y la recopilación de datos pertinentes. Los resultados obtenidos revelan una estrecha vinculación entre la exposición de las víctimas a situaciones de peligro autogenerado y el aumento de la delincuencia, así como la existencia de medidas de protección efectivas para prevenir tal fenómeno. Tanto los especialistas consultados como los participantes en las encuestas coinciden en la necesidad apremiante de implementar acciones de protección más eficaces. En última instancia, se deduce que existe una correlación esclarecedora entre la exposición de las víctimas a situaciones de peligro autogenerado y el aumento de la actividad delictiva. Se han identificado acciones de protección capaces de prevenir dicha exposición, tales como la implantación de políticas públicas preventivas y de abordaje de la violencia intrafamiliar y de género, además de la formulación de nuevas políticas públicas encaminadas a evitar el incremento en los índices de violencia.

Palabras claves: Autopuesta en peligro, Violencia de género, Violencia Familiar, Medidas de Protección, Dependencia.

ABSTRACT

Failure to comply with safeguard measures carries a tangible risk for the individuals affected and contributes to the increase in criminal activity. The purposes of this study are to analyze in detail the existing correlation between the exposure of victims to situations of self-generated danger and the increase in crime, to identify protective actions aimed at preventing said exposure, and to evaluate the effectiveness of such actions. Through a scientific and rigorous approach, which involves the examination of documents, the application and conduct of surveys, the sample selection procedure and the collection of relevant data are exhaustively described. The results obtained reveal a close link between the exposure of victims to situations of self-generated danger and the increase in crime, as well as the existence of effective protection measures to prevent such a phenomenon. Both the specialists consulted and the participants in the surveys agree on the urgent need to implement more effective protection actions. Ultimately, it follows that there is an illuminating correlation between the exposure of victims to situations of self-generated danger and the increase in criminal activity. Protection actions capable of preventing such exposure have been identified, such as the implementation of preventive public policies and the approach to intra-family and gender violence, in addition to the formulation of new public policies aimed at avoiding an increase in the rates of violence.

Keywords: Self endangerment , gender violence, family violence, protection measures, dependency.

INTRODUCCION

La cuestión de la violencia de género y la violencia dirigida hacia el género femenino representa una problemática de amplio alcance a nivel mundial, enraizada en la estructura sociocultural. Los movimientos feministas han expresado su disconformidad con el fin de generar conciencia en los gobiernos y promover la adopción de medidas apropiadas para salvaguardar la integridad de las mujeres. Uno de los acontecimientos pioneros en reconocer dicha problemática fue la Declaración referente a la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, emitida en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta declaración propugna una protección integral dirigida hacia el género femenino, cimentada en los principios de libertad, integridad, seguridad, dignidad e igualdad, y sugiere la implementación de enfoques adecuados en los marcos legales y normativos.

En América Latina, se registra el primer hito en la Convención de Belém Do Pará (1994). Este acuerdo fue establecido por la Organización de Estados Americanos con el fin de abordar la creciente preocupación por los altos índices de violencia de género. La convención defiende firmemente la idea de que el desarrollo pleno de los individuos y de la sociedad se alcanza al eliminar cualquier forma de violencia contra las mujeres. En consecuencia, se hace un llamado a los países americanos en el artículo 7 y los siguientes a regular, dentro de sus sistemas legales, el marco jurídico necesario para prevenir, castigar y erradicar cualquier expresión de violencia contra las mujeres. Este esfuerzo busca fomentar el respeto incondicional de los derechos humanos de las mujeres y garantizar la protección de su bienestar físico y mental.

Como respuesta a la problemática mencionada, numerosos países, entre ellos Perú, han incluido disposiciones en sus sistemas legislativos para salvaguardar contra actos de

violencia dirigidos a mujeres y miembros de la familia. En Perú, dicha salvaguardia se encuentra regulada por la Ley N° 30364, promulgada en 2015, cuyo propósito consiste en la prevención, sanción y eliminación de la violencia hacia mujeres y miembros del grupo familiar. Esta legislación instituye mecanismos de protección y fomenta una respuesta pronta e inmediata para asegurar la integridad de las mujeres. El objetivo de esta norma es proporcionar una tutela eficaz a las mujeres y resguardar su bienestar.

Sin embargo, los datos suministrados por el portal CEPAL de las Naciones Unidas (2020) revelan una situación desalentadora en la actualidad. En América Latina, se ha informado de más de 4 mil casos de feminicidio en el año 2020, una realidad que no difiere significativamente de la que se experimenta en nuestra nación. En consonancia, las estadísticas presentadas por el Portal Estadístico del Programa Nacional Aurora, adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, indican que en el año 2021 se documentaron 136 casos de feminicidio y 239 casos de tentativa a nivel nacional. Este preocupante panorama ha llevado a que GALLUP, en el año 2021, clasifique al Perú como el sexto país con mayor percepción de inseguridad a nivel global, debido a las deficientes políticas estatales para contener estos alarmantes índices de violencia y feminicidios.

Ahora bien, como se ha señalado esta realidad no ha sido ajena a nuestro estado, quien ha tratado de regular protecciones ideales, no obstante en dicho ideal ha equivocado el camino al optar por el populismo punitivo, incrementos de penas, prohibición de beneficios procesales, entre otros, lo cual no representa una correcta solución o adecuado mecanismo de protección para la grave problemática a la que nos enfrentamos, lo que nos hace preguntarnos, si el verdadero punto determinante del asunto, no es el tratamiento que se le da a la víctima desde el primer conocimiento de una violencia previa en su contra, como mecanismo para evitar un futuro feminicidio, prestándole mayor

importancia a la aplicación de medidas de protección y un adecuado enfoque interdisciplinario que permita dar soporte a las víctimas de estos delitos, desde el punto de vista social, emocional y psicológico, sobre todo si consideramos que en su mayoría, las víctimas presentan una serie de dependencia con sus agresores (económica, social, psicológica, familiar) que va a influir muchas veces en la aparición de nuevos casos de violencia, cada uno con mayor intensidad que el anterior.

En dicho sentido, el presente trabajo se va a centrar en determinar la incidencia entre la falta de cumplimiento de las medidas de protección propiciadas por la propias víctimas, como consecuencia de un nulo o deficiente acompañamiento estatal a las mismas, suponiendo ello un factor de riesgo para la comisión de un nuevo hecho delictivo; por lo que se abordará desde una perspectiva cuantitativa correlacional en la que se analizará la opinión de profesionales en derecho sobre el tema objeto de investigación, para culminar con la elaboración de una propuesta que permita superar la realidad problemática presentada.

CAPITULO I: ASPECTOS METOLOGICOS

1. Realidad problemática

1.1. Planteamiento del problema

En la actualidad, tanto en el Perú como a nivel mundial, se enfrenta un tema muy debatido llamado violencia de género. Desde mediados del siglo XX, diversos grupos sociales han llevado a cabo protestas en busca de la defensa de los derechos de las mujeres. Los gobiernos, conscientes de que este problema parece estar profundamente arraigado en la sociedad, han propuesto la implementación de leyes y acuerdos para regular de manera adecuada la protección y preservación de la integridad y los derechos de las mujeres.

Dentro de este contexto, resulta relevante subrayar la Declaración relativa a la Erradicación de la Violencia hacia el Sexo Femenino, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. En tal declaración, los estados miembros de la ONU asumieron el compromiso de salvaguardar de manera integral a las mujeres, con el propósito de asegurar el pleno respeto de su dignidad como seres humanos y garantizarles seguridad y equidad de oportunidades. Este documento constituye un hito significativo en la lucha en contra de la violencia de género y ha fungido como fundamento para la promulgación de legislaciones y medidas protectoras a nivel mundial.

En el ámbito latinoamericano, es importante destacar la relevancia de la Convención de Belem do Pará (1994), adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta convención surge como respuesta al

aumento evidente de los delitos relacionados con la violencia de género, violencia familiar y feminicidios, que son motivo de preocupación en los estados actuales. La Convención insta a los países miembros a regular, en sus respectivas leyes, los mecanismos adecuados para prevenir, castigar y erradicar cualquier forma de violencia contra la mujer. Además, busca promover el total respeto de los derechos humanos de las mujeres y asegurar su bienestar físico y mental. En respuesta a estas recomendaciones, los gobiernos a nivel mundial han modificado sus leyes penales desde finales del siglo XX, con el objetivo de proteger de manera efectiva a las mujeres y reconocer plenamente sus derechos. En el caso de Perú, la Ley n.º 30364, promulgada en 2015, es la legislación vigente para este propósito. Esta ley tiene como objetivo sancionar y eliminar toda forma de violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar, basándose en principios de acción oportuna y adecuada, y priorizando la protección de la víctima a través de la implementación de medidas de seguridad, entre otras disposiciones.

Con el fin de cumplir con la política estatal de prevención y lucha contra cualquier tipo de violencia hacia mujeres y miembros del grupo familiar, es comúnmente concedido, luego de un análisis judicial, el otorgamiento de medidas de seguridad a las víctimas al momento de realizar una denuncia. Estas medidas tienen como objetivo evitar la comisión de futuros delitos al alejar a las víctimas de sus agresores o del lugar donde ocurrieron los actos de agresión.

No obstante, una realidad innegable en nuestra sociedad es que la mayoría de mujeres víctimas de estos delitos presentan niveles de

dependencia (emocional/económica/social) hacía sus parejas o agresores, situación que lleva muchas veces a las víctimas a regresar con ellos, aun cuando esto suponga una autopuesta peligro para su integridad y su vida, situaciones que en muchas veces puede llevar a un desenlace fatal como es la comisión de nuevas agresiones o un feminicidio en su contra.

Entonces, la problemática radica en que, a pesar de existir políticas públicas sobre la prevención de la violencia contra la mujer, los casos siguen surgiendo, y las mujeres agraviadas siguen en aumento, demostrándose que no están surgiendo efectos los métodos de protección estatal a las víctimas del mencionado delito.

Ministerio de Salud. (2022). El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, a través de la Dirección de Vigilancia en Salud Pública informó que, entre el mes de enero y octubre del año 2022, los casos de violencia a la mujer se tradujeron en el 86% de notificaciones a nivel nacional.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2022) en la Nota de Prensa N. 187 en razón al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra cada 25 de noviembre, informa que, en el Perú, el 54,9% de las mujeres que su edad radica entre 15-49 años, sufrió de violencia familiar, siendo el agresor el esposo o compañero,

Estos porcentajes sólo denotan que, a pesar de la existencia de normas punitivas, las cifras de violencia sólo van en aumento. Entonces, la simple tipificación y condena no son suficientes para reducir los índices

de criminalidad. Partiendo desde esa perspectiva, a través del acompañamiento estatal, deberían las políticas preventivas, coadyuvar a la disminución de casos como los mencionados. Lo cual, no se materializa en la realidad.

Las políticas públicas son: El Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, El Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo, El objetivo 1 de la Política Nacional de Igualdad de Género y El Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer. Los cuales fueron aprobados por la Ley n.º30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Ello, tomando en consideración que son las mismas víctimas quienes regresan con sus agresores, concluyendo entonces, que las políticas estatales contra la violencia a la mujer no están surgiendo efecto.

1.2. Formulación del Problema

¿Cuál es la influencia de la autopuesta en peligro de las víctimas en el incremento delictivo?

1.3. Justificación e importancia del Estudio

1.3.1. Justificación del estudio

Esta situación surge debido a un tema de gran relevancia en nuestra sociedad, que ha aumentado en los últimos años en

nuestro país: la violencia familiar y de género. Se ha abordado en repetidas ocasiones como un asunto político, donde ha prevalecido el enfoque punitivo populista, priorizando la creación de delitos simbólicos en lugar de encontrar soluciones reales que protejan eficazmente a las víctimas.

Existe un documento internacional conocido como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue aprobado en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993 y publicado el 23 de febrero de 1994 (ONU, 1993). Este texto tiene como objetivo establecer una definición de los diferentes tipos de violencia que afectan a las mujeres.

Por ello, se pretende por medio de la presente investigación abordar las políticas públicas que se vienen brindando para prevenir estos delitos y verificar si otorgan a las víctimas las herramientas necesarias para superar la dependencia que puedan presentar hacia sus agresores a efectos de evitar volver a ser víctimas de un posterior delito, o de un desenlace fatal.

1.3.2. Importancia del estudio

La importancia del tema reside en examinar y comparar las políticas gubernamentales que buscan evitar los delitos relacionados con la violencia familiar y de género en nuestro país. Al realizar un análisis detallado e imparcial de estas medidas, se pueden identificar tanto sus aspectos positivos como sus

limitaciones. A través de esta investigación exhaustiva, se pretende proponer una iniciativa que fortalezca de manera efectiva los esfuerzos para prevenir y perseguir estos delitos, abordando así un problema social que ha tenido un gran impacto en nuestra sociedad en los últimos años.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Determinar la influencia de la autopuesta en peligro de las víctimas en el incremento delictivo

1.4.2. Objetivos Específicos

Explicar las políticas públicas de prevención y lucha contra la violencia familiar y de género en el Perú.

Analizar la figura de las medidas de protección, así como las razones de su incumplimiento en la región Lambayeque.

Proponer la creación de una nueva política pública de prevención y lucha contra la violencia familiar y de género en el Perú a efectos de evitar el incremento en dichos índices.

1.5. Hipótesis

Ho: No existe una relación significativa entre la autopuesta en peligro de las víctimas al incumplir las medidas de protección y el incremento delictivo.

Ha: Existe una relación significativa entre la autopuesta en peligro de las víctimas al incumplir las medidas de protección y el incremento delictivo.

1.6. Variables

1.6.1. Variable independiente

Auto incumplimiento de las medidas de protección

1.6.2. Variable dependiente

Incremento de las tasas delictivas de delitos de violencia familiar y de género

1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

1.7.1. Métodos

Presenta un método inductivo deductivo, que se va a centrar en un principio en determinar en base al fenómeno observado y la realidad problemática analizada, su naturaleza y fenomenología, la cual será tomada como punto de partida para la construcción de nuevos enunciados científicos que puedan ser aplicados a situaciones similares, o para dar respuesta a nuevos problemas, en un determinado contexto.

Guevara, G et al (2020), citando a Martínez, menciona que la investigación descriptiva se encarga de detallar los caracteres del medio poblacional. A través de juicios consecuentes, que coadyuvan en la fijación del comportamiento del fenómeno que se va a estudiar. De igual manera se hará uso de información adicional para la comparación con diferentes fuentes.

1.7.2. Técnicas

Las técnicas de adquisición de datos constituyen las diligencias y procedimientos empleados por los eruditos con el propósito de obtener los elementos de conocimiento requeridos en el marco de

su estudio. Dichas técnicas se sustentan en la utilización de artefactos especializados.

En este estudio, se han seleccionado los siguientes instrumentos de recolección de datos:

a) El fichaje:

Loayza (2021) refiere que la estrategia conocida como "El Fichaje de Investigación" tiene como objetivo principal registrar y organizar la información obtenida de revistas científicas, libros académicos y otras fuentes bibliográficas. Las fichas de investigación surgen como una necesidad para llevar un registro ordenado de los datos consultados. Al aplicar la técnica del fichaje en la investigación, se logra un trabajo más eficiente y estructurado en el análisis de la información recopilada. Dicha estrategia formativa busca facilitar el proceso de investigación al proporcionar una herramienta práctica y ágil para el manejo de la información. Con el objetivo de realizar un análisis documental y jurisprudencial adecuado de la información recopilada, se busca consultar libros, revistas de derecho y casos de jurisprudencia. Estas fuentes permiten obtener una visión más completa sobre cómo se aborda el problema en cuestión en la práctica jurídica.

b) La encuesta

La encuesta es conceptualizada como una forma de entrevista

mediante un cuestionario. No obstante, al considerar su carácter autoadministrado, no se puede respaldar plenamente esta afirmación, ya que en este método el diálogo se establece entre el encuestado y sí mismo a través del cuestionario proporcionado. A pesar de esta diferencia, los autores brindan una definición adecuada al describir la encuesta como un enfoque empírico que emplea un formulario impreso o digital para recopilar respuestas relacionadas con el problema de investigación, y en el cual los participantes completan el cuestionario por sí mismos (Feria et al, 2020, citando a Lanuez y Fernández)

En cuanto a la clasificación de la encuesta según la participación del investigador, se puede distinguir:

- Encuesta personal: en la que el propio investigador aplica directamente el cuestionario.
- Encuesta por envío: en la que el investigador hace llegar el cuestionario a los sujetos a encuestar mediante correo u otros medios de intermediación.

El cuestionario fue utilizado para recopilar perspectivas de magistrados, fiscales y abogados especializados penalistas en Lambayeque. El objetivo era obtener información basada en su experiencia en investigaciones

y procesos penales relacionados con la violencia contra la mujer, concretamente aquellos casos en los que se había dictado una medida de protección y, como resultado del incumplimiento de dicha medida, se produjo un desenlace fatal. Utilizamos el cuestionario como instrumento para llevar a cabo este proceso de recolección de datos.

1.7.3. Instrumentos

Fichas

A través de estas acciones, se llevará a cabo la recopilación de información importante obtenida de fuentes de investigación, con el fin de adquirir conocimiento acerca del enfoque proporcionado en los estudios y los casos judiciales relacionados con el tema de la violencia de género y las medidas de protección.

Hopkins (2019) expresa que las fichas bibliográficas son herramientas físicas que brindan apoyo al tesista al permitirle mantener una cita o algún resumen y, lo más importante, poder volver al medio que se utilizó para la obtención de la información. Los elementos esenciales que deben incluirse en una ficha bibliográfica consisten en: nombre del dueño o creador de esta, ámbito geográfico donde se realizó, fecha, el título, resumen de lo que contiene y citas de texto, entre otras

Cuestionario

Según las afirmaciones hechas por Arias (2020), se hace

mención al cuestionario como una herramienta ampliamente empleada en la investigación científica con el propósito de recolectar datos. El cuestionario se compone de una serie de interrogantes presentadas en una estructura tabular, en conjunto con opciones de respuesta, que son presentadas al sujeto encuestado. Cabe destacar que no se establece un criterio definido de respuestas correctas o incorrectas en relación a las preguntas del cuestionario, dado que cada respuesta puede desembocar en un resultado variable. Es importante resaltar que este instrumento es administrado a una población de individuos, quienes proporcionan sus respuestas basadas en sus propias experiencias o conocimientos adquiridos.

Con el fin de comprender la percepción de los profesionales del derecho sobre el tratamiento procesal y la práctica diaria relacionada con nuestra problemática actual, es necesario elaborar un cuestionario. Este cuestionario deberá incluir preguntas que permitan medir las variables de investigación pertinentes. Además, se debe diseñar un sistema de escalas e ítems, que puede complementarse con la escala de Likert de cinco puntos (donde 1 representa "Completamente en desacuerdo" y 5 representa "Completamente de acuerdo"). El objetivo es obtener las respuestas de los operadores jurídicos y así tener una comprensión más profunda de su experiencia y perspectiva en relación con nuestro problema en estudio.

CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL

2.1. Antecedentes históricos

2.1.1. Antecedentes nacionales

Pizarro (2017) investiga la validez legal de las cláusulas de protección establecidas en la Ley N° 30364, también conocida como "Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar", y su respectivo reglamento. Se realizará un análisis minucioso de la relación entre estas cláusulas y los principios legales de acceso a la justicia y garantía del debido proceso. Además, se compararán estas medidas con los procedimientos de emergencia utilizando un enfoque teórico y deductivo basado en la legislación y la doctrina actual, y considerando la escasa jurisprudencia peruana en este ámbito.

El autor, en su análisis final, sostiene que las disposiciones de salvaguardia establecidas por el marco legal carecen de una categorización jurídica precisa, aunque desempeñan una función relevante en la salvaguardia de los derechos humanos de los afectados por la violencia intrafamiliar. Estas medidas son concebidas como instrumentos procesales que integran el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, incumbiendo al poder estatal la responsabilidad de asegurar su ejercicio pleno.

Echegaray (2018) propuso investigar los elementos que afectan la efectividad de las medidas de protección para prevenir feminicidios. Para este propósito, se utilizó un enfoque descriptivo que relaciona y analiza las causas, y se recolectó información a través de cuestionarios aplicados a jueces, fiscales, abogados y miembros de la Policía Nacional del Perú. Los

resultados obtenidos revelan un alto grado de acuerdo en cuanto a la falta de eficacia de estas medidas, incluso se identificaron casos en los que las víctimas, inicialmente beneficiadas por ellas, posteriormente sufrieron feminicidios. Se pudo confirmar que la falta de recursos técnicos y personal en la Policía es un factor significativo, al igual que el hecho de que las víctimas no denuncien el incumplimiento por parte del agresor. Estas conclusiones resaltan la necesidad urgente de abordar estas deficiencias para mejorar la protección de las mujeres en situaciones de violencia doméstica.

Fiestas (2019) realizó un estudio detallado para determinar los factores que afectan el incumplimiento de las medidas de protección adoptadas por las víctimas en casos de violencia doméstica, así como analizar las deficiencias en la legislación relacionada. Mediante un enfoque exploratorio y descriptivo, se llevará a cabo un análisis exhaustivo con el propósito de descubrir las causas subyacentes y proponer mejoras que aumenten la eficacia de dichas medidas, con el objetivo de prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y los miembros de una unidad familiar.

Los hallazgos derivados de la investigación evidencian que, pese a la existencia de la legislación conocida como Ley 30364, las disposiciones adoptadas con el objetivo de resguardar los derechos de las partes involucradas no han sido eficaces para mitigar satisfactoriamente los incidentes de violencia intrafamiliar. La escasez de recursos económicos y personal debidamente capacitado en el seno de la institución conocida como Policía Nacional del Perú ha resultado en un incremento en la

cantidad de individuos que han sido afectados por estos actos de violencia. En consecuencia, es imperativo contar con un ente especializado, el cual cuente con el conocimiento y entrenamiento apropiados, que pueda brindar una protección adecuada y pertinente en estos casos. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta el perfil psicológico de la víctima, dado que este factor puede influir en el incumplimiento de las medidas de resguardo. Como resultado, se hace necesario fortalecer las medidas destinadas a proteger a aquellas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

Antecedentes internacionales

Aguayo (2020) en su artículo, se propone reflexionar sobre la consideración de la tentativa de feminicidio como un delito independiente que necesita ser debidamente tipificado. Además, se pretende destacar la influencia patriarcal del Estado y sus instituciones como promotores y facilitadores de la violencia de género. También se busca examinar un caso emblemático de una mujer que sufrió un intento de feminicidio en Ecuador, con el objetivo de mostrar las deficiencias y limitaciones del sistema judicial en la protección de las mujeres. Para lograr esto, se lleva a cabo una discusión teórica basada en perspectivas feministas, así como un análisis teórico-metodológico centrado en el caso particular de la víctima.

El autor concluye que la violencia de género en forma de feminicidio y su tentativa es un problema alarmante en Ecuador, con altos índices de impunidad y revictimización. Diversos factores estructurales y sociodemográficos aumentan el riesgo de feminicidio, mientras que la ineficacia estatal perpetúa la violencia. El caso de Luisa ejemplifica la vulneración de derechos y la negligencia del Estado. En conclusión, es

urgente tipificar la tentativa de feminicidio como un delito autónomo para visibilizar los casos, generar conciencia social y política, y promover medidas efectivas de protección y prevención.

Guerrero (2021) Realiza un exhaustivo estudio sobre la importancia de las medidas de precaución y provisionales en el contexto de la violencia familiar hacia las mujeres, como una forma de prevenir el feminicidio. El objetivo principal es examinar la conexión entre estos delitos y explorar cómo la aplicación adecuada de las medidas de protección puede contribuir positivamente a la reducción de los casos de feminicidio. En términos de enfoque de investigación, este artículo se basa en un análisis legal, también aborda una perspectiva histórica de la violencia doméstica contra las mujeres y el concepto de feminicidio en sí. Además, se examinan detalladamente las medidas de protección y cautelares vigentes a nivel nacional e internacional en este tema.

El autor sostiene que la inclusión del delito de feminicidio en el marco jurídico constituye un avance de gran importancia en la contienda contra la violencia de género. No obstante, es imprescindible complementar esta medida con acciones concretas, tales como la sensibilización, la mejora de la legislación y los programas orientados hacia la igualdad, así como la adopción de una perspectiva de género en el ámbito judicial. Además, se deben implementar medidas preventivas para abordar la violencia intrafamiliar y brindar salvaguardias a las víctimas. En suma, es esencial un enfoque integral y sostenido para erradicar la discriminación y la violencia dirigida hacia las mujeres.

Rico (2022), en su artículo científico analiza el derecho a la vida libre de actos violentos, en punto de vista desde el género y la violencia institucional. Se pretende también ahondar más sobre el rol del juez garante en el

resguardo d las víctimas y describir los obstáculos y barreras burocráticas que enfrentan las víctimas al solicitar medidas de protección. Esta investigación tiene un enfoque exploratorio y descriptivo, con el propósito de comprender y analizar las problemáticas relacionadas con la perspectiva de género en la administración de justicia y su impacto en la protección de las mujeres en Colombia.

En conclusión, la respuesta judicial deficiente ante la violencia contra las mujeres en Colombia se debe a la falta de óptica de género cuando se imparte justicia y a la resistencia al cambio por parte de sectores conservadores. Esto se refleja en altas tasas de feminicidio y en trabas que no permiten una protección adecuada a la mujer. Es necesario promover la conciencia sobre una vida libre de violencia, mejorar la capacitación en género y fortalecer el seguimiento de las medidas de protección adoptadas para garantizar la seguridad y el bienestar de las mujeres en el país.

2.2. Definiciones doctrinarias

2.2.1. familia

Podemos definir a la familia como aquel conjunto de personas con un vínculo o parentesco, sanguíneo o político, indistintamente del grado del mismo, que deciden hacer una vida en común, caracterizándose en su mayoría por la ocupación común de una casa o vivienda.

2.2.2. Violencia

Se entiende el concepto de violencia, como aquel uso desproporcionado e intencional de la fuerza, poder o superioridad contra otra persona o grupo de personas generando en ellas una afectación, ya sea física o psicológica, sin

importar las circunstancias en las que se dio la violencia o los medios empleados para la misma.

2.2.3. Violencia familiar

Esta violencia se efectúa en el interior de los núcleos familiares generalmente de manera premeditada con episodios continuos de maltrato físico psicológico o de naturaleza sexual entre sus miembros como consecuencia de la subordinación o sentido de pertenencia hay que precisar que nuestro ordenamiento jurídico peruano una violencia familiar no solamente hace referencia a los estadios de convivencia sino también a la producida por ex parejas otros miembros familiares por consanguinidad o afinidad.

2.2.4. Violencia de género

Es aquella dirigida contra un sujeto o grupo de sujetos, por cuestiones netamente de género, basándose en ideas arcaicas de disparidad, abuso y diferencias, siendo uno de los principales retos de los estados modernos extirpar de su ordenamiento y población dichas ideas, a efectos de que tanto hombres y mujeres, puedan no solo tener igual protección a su integridad, sino también igualdad de oportunidades.

2.2.5. Lesiones

Una lesión, es el resultado de un acto de agresión o un mal producido por un sujeto en otro, afectando tanto su salud, como su integridad física y psíquica, pero sin poner en riesgo de muerte su vida, sino afectando su cuerpo y el desempeño regular de sus actividades y pueden producirse tanto por actos dolosos, como imprudentes o preterintencionales.

2.2.6. Femicidio

Saccomano (2017) señala que las actuales definiciones de feminicidio o feminicidio como también es conocido, hacen referencia a la matanza de una mujer por su condición de tal, misoginia o machismo, caracterizado por ser un delito de tendencia interna trascendente, que la diferencia de un asesinato o un homicidio calificado, en el que se valora además la existencia de un contexto determinado o la presencia de actos previos de violencia.

2.2.7. Protección

La protección se entiende en palabras de la Real Academia Española de la Lengua, como aquel cuidado de naturaleza preventiva ante un posible riesgo o un problema latente, el cual busca evitarse o reducir los efectos nocivos que suponen su producción.

2.2.8. Medidas de protección

Centurión, (2022) define las medidas de protección, como aquellas acciones estatales adoptadas en un contexto determinado ante un acto de violencia, por lo general de género, en el que se pretende evitar la comisión de un nuevo delito o uno de mayor naturaleza, mediante un alejamiento entre la víctima y agresor, que permita imposibilitar escenarios en los que se puedan repetir actos de naturaleza violenta.

2.2.9. Acompañamiento interdisciplinario

Entendido, como señalan Pérez & Merino, (2017) como aquel soporte brindado por el Estado, a través de sus órganos descentralizados, que permita un monitoreo constante el estado de la víctima para superar el trauma psíquico que el mismo ha podido producir o ayude a las víctimas a superar periodos de

dependencia que presentan con su agresor, indistintamente de la naturaleza del mismo.

2.2.10. Dependencia emocional

Salazar, (2016) define la dependencia emocional, como aquella necesidad afectiva de naturaleza extrema de una persona frente a otra, en el seno de una relación afectiva, llevando muchas veces a soportar golpes o humillaciones, por el miedo incontrolable a sentirse solos y la necesidad de tener a alguien a su lado.

2.3. Regulación legal en el Perú

A nivel nacional, existe una legislación, conocida como Ley n.º 30364, (2015), cuyo propósito es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los miembros de la familia. Esta ley representa la respuesta del Estado en la lucha contra la violencia de género, estableciendo principios de intervención rápida y adecuada a través de la implementación de medidas de protección. El objetivo principal es garantizar la protección y bienestar de las mujeres.

No obstante, la situación actual resulta desalentadora, tal como se evidencia en las estadísticas proporcionadas por el Portal Estadístico del Programa Nacional Aurora (2021), adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Conforme a dichos datos, se han registrado 136 casos de feminicidio y 239 casos de intento de feminicidio a nivel nacional. Estas cifras alarmantes han dado lugar a que análisis como el informe Global Law and Order 2021 de GALLUP en 2021 posicionen a la República del Perú como la sexta nación con mayor percepción de inseguridad en el orbe. La situación obedece a la falta de una política gubernamental adecuada para abordar estos niveles de violencia y feminicidios.

En dicho sentido, la (Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 2020) Se menciona que la violencia contra las mujeres debe ser comprendida como cualquier acción que cause sufrimiento, lesiones o daños, sin importar su naturaleza. Esto ocurre tanto en el ámbito privado como en el público, y se origina en estereotipos de género. Esta definición se basa, en parte, en las Naciones Unidas, quienes describen la violencia de género. Según esto, se entiende que es necesario brindar una protección integral y multidisciplinaria a las mujeres que son víctimas de violencia o agresiones. Esto implica no solo sancionar a los agresores, sino también prevenir futuros casos de agresión.

Desde una perspectiva teórica, la ciencia jurídica también ha intentado definir la violencia familiar. Por ejemplo, según Stanford Childrens Health (2020), se ha señalado que, de acuerdo con la Coalición Nacional contra la Violencia Familiar, la violencia dentro del ámbito familiar suele comenzar con palabras ofensivas, como insultos o amenazas. Con el tiempo, estas acciones pueden volverse más graves y llevar a actos de agresión física, como empujones, golpes y restricciones físicas impuestas sin consentimiento de la víctima, poniendo en peligro el bien legal de la vida, causando lesiones más complejas e incluso involucrando el uso de objetos contundentes.

Cabe resaltar que como ya se ha señalado en párrafos anteriores la ciencia jurídico penal entiende que la afectación o la violencia familiar y extiende los conceptos tradicionales de violencia física llegando hasta los planos psicológicos sexuales económicos entre otros.

En el mismo sentido, se prevén los siguientes tipos de violencia:

➤ **Violencia Económica:**

Stanford Childrens Health (2020) refiere que este tipo de violencia ocurre cuando la persona que ejerce maltrato tiene el control total sobre los recursos de la víctima, incluyendo el tiempo, el transporte, la comida, la vestimenta, el refugio, el seguro y el dinero. Por ejemplo, puede interferir en la capacidad de la víctima para proveerse a sí misma e insistir en controlar todas las finanzas de la víctima. Incluso cuando la víctima logra salir de la relación violenta, el agresor puede utilizar el aspecto económico como una forma de mantener el control o presionar a la víctima para que regrese.

➤ **Violencia Física:**

Antépara (2020) La violencia física implica inmiscuirse en el espacio personal alguien más a través de dos modos: mediante el contacto directo con golpes, empujones y restricción física, o limitando los movimientos al encerrar, utilizar armas, forzar relaciones sexuales o causar daño letal. Esta forma de violencia se plasma de forma física en la víctima, aunque el aspecto emocional también sufre, con exclusión de los casos más graves que resultan en la muerte.

➤ **Violencia sexual:**

Organización Mundial de la Salud (2021) refiere que se considera violencia sexual:

«Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada»

La violencia hacia las mujeres abarca una variedad de comportamientos que causan daño a su integridad física, sexual o emocional, tanto en entornos públicos como privados. Dentro de este contexto se encuentra la violencia en relaciones de pareja, que incluye acciones perjudiciales como agresiones físicas, coerción sexual, abuso psicológico y actos de control. Además, la violencia sexual abarca cualquier acto de naturaleza sexual no consensuada, incluyendo intentos de violación y otras formas de agresión que afectan la sexualidad de una persona, sin importar la relación que tengan con el agresor.

➤ **Violencia psicológica:**

Según Escobal (2020), comprende que, en el ámbito de la violencia familiar, la violencia psicológica o emocional implica utilizar estrategias mentales y emocionales con el fin de causar daño a una persona. Estas tácticas incluyen el uso de palabras ofensivas, amenazas, acoso constante, control excesivo, aislamiento forzado y daño a pertenencias personales. El agresor busca tener control sobre el tiempo, las actividades y las relaciones sociales de la víctima, con el propósito de interferir en sus apoyos y manipular su percepción de la realidad a través de mentiras. En resumen, la violencia psicológica tiene como objetivo principal ejercer dominio mediante el deterioro emocional y psicológico de la víctima.

➤ **Violencia por omisión:**

Guevara (2022) señala que La violencia por omisión ocurre cuando una persona no cumple con sus deberes hacia otra con quien tiene una relación de parentesco. Por ejemplo, los padres pueden descuidar sus responsabilidades hacia sus hijos, o los hijos pueden ignorar las necesidades de sus padres ancianos. Esta forma de violencia se caracteriza por la inacción, donde el

silencio, la indiferencia, el abandono y la negligencia se convierten en actos agresivos que perpetúan la situación de violencia. Aunque no se exprese de manera explícita la intención de causar daño, la falta de acción puede tener consecuencias perjudiciales para la otra persona.

El derecho de las mujeres a una existencia exenta de violencia constituye un derecho primordial amparado por nuestra legislación, en consonancia con las recomendaciones establecidas por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la "Convención de Belém do Pará". El artículo 3 de dicha convención alude al imperativo de que toda mujer, sin importar su ubicación, goce de una vida libre de violencia, con trato igualitario y respetuoso. Corresponde al Estado la obligación de salvaguardar su integridad y protegerla contra cualquier forma de agresión.

Dichos mandados de protección se encuentran recogidos en nuestra carta magna, misma que no hace diferencia entre hombres o mujeres al momento de establecer la necesidad de tutelar la vida la integridad en todos los aspectos en defensa de la persona humana y su dignidad, previendo además la intervención de sus organismos institucionales para que la aplicación del disponente pueda sancionar cualquier acto que vaya en contra de estas consideraciones.

Precisamente en esta dirección se plantean las medidas de resguardo como una respuesta por parte del Estado para salvaguardar a las víctimas de violencia, procurando su separación de los perpetradores con el propósito de minimizar las posibilidades de cometer un nuevo delito en perjuicio de la víctima o de algún miembro de su núcleo familiar. Es importante destacar que la mayoría de estos actos de agresión derivan de la transgresión de un papel o estereotipo de género impuesto por una mentalidad anacrónica a las mujeres.

Por tanto, el objetivo principal radica en preservar la integridad de las personas afectadas a lo largo del procedimiento de indagación mediante la concesión de una disposición de salvaguardia. Estas medidas pueden ser ampliadas o modificadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Decreto Supremo n.º 004-2019, y son otorgadas por un magistrado especializado que evalúa la necesidad, urgencia y requisitos de protección, así como la existencia de un riesgo inminente.

Asimismo, se debe tener en cuenta la subsunción en la disposición a) del artículo 22 del Decreto Legislativo n.º 1386, que modifica la ley 30364.

En dicho instrumento legal, también se deben considerar las medidas cautelares y las advertencias coercitivas en caso de incumplimiento, tomando en consideración la posible comisión de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad tipificados en el artículo 37.4 del Decreto Supremo 004-2019.

2.4. Legislación comparada

La primera respuesta internacional a la violencia de género tuvo lugar en Nueva York, Estados Unidos, mediante la presentación de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas en 1993. Este comunicado plantea la promoción y salvaguardia completa de los derechos femeninos, fundamentados en valores como la libertad, la integridad, la seguridad, la dignidad y la igualdad. También sugiere a los países miembros la adopción de las acciones requeridas para integrar este enfoque en sus marcos legales.

En la región latinoamericana, más precisamente en Belém Do Pará, Brasil, se sentó un importante precedente en 1994 mediante la Convención de Belém Do Pará. Durante esta reunión, la Organización de Estados Americanos manifestó su preocupación ante el aumento de los actos violentos dirigidos hacia las mujeres, y

reafirmó su convicción de que la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer es esencial para su completo desarrollo personal y social. En este sentido, exhortaron a los países americanos, en los artículos 7 y posteriores, a regular en sus sistemas jurídicos las medidas necesarias para prevenir, sancionar y eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. De esta manera, se promueve un total respeto por los derechos humanos de las mujeres y se asegura la protección de su bienestar físico y emocional.

En Argentina, la Ley n.º 26485, conocida como la Ley de Protección Integral a las Mujeres, ha estado en vigencia desde 2009. Esta ley tiene como objetivo luchar contra la violencia, la discriminación y los patrones socioculturales que afectan la integridad y el pleno respeto de los derechos de las mujeres. Además, prevé la posibilidad de adoptar cualquier medida adecuada para garantizar la seguridad de las mujeres en su hogar hasta que cese el riesgo de agresión, perturbación o intimidación por parte de su agresor.

En Chile, donde no existe una legislación integral contra la violencia de género, la protección estatal a las mujeres víctimas de violencia se divide en diferentes leyes independientes. Estas incluyen la Ley n.º 20.066 o Ley de Violencia Intrafamiliar, la Ley n.º 20.480 que regula el delito de feminicidio, la Ley n.º 20.507 o Ley de Trata de Personas, la Ley n.º 20.005 o Ley de Acoso Sexual Laboral y la Ley 20348 o Ley de la Igualdad Salarial.

En España, se promulgó la Ley Integral contra la Violencia de Género, también conocida como Ley Orgánica 1/2004. Esta ley, pionera y de referencia en la lucha contra la violencia de género, se implementó el 28 de diciembre de 2004 y ha tenido un impacto significativo en la protección de las mujeres y la prevención de la violencia de género en el país.

Estas regulaciones se deben a que la violencia de género no se limita al ámbito privado, sino que es un fenómeno que refleja de manera contundente la desigualdad existente en nuestra sociedad. Esta forma de violencia se dirige específicamente hacia las mujeres por el simple hecho de serlo, siendo consideradas por sus agresores como personas carentes de los derechos fundamentales de libertad, respeto y autonomía.

La Ley Integral contra la Violencia de Género abarca aspectos fundamentales como:

- Medidas de protección: La ley establece la responsabilidad de las autoridades de garantizar la seguridad y protección de las víctimas, incluyendo órdenes de protección, refugios seguros y dispositivos de seguimiento.
- Prevención y sensibilización: La normativa busca prevenir la violencia de género a través de la concientización, educación y capacitación para profesionales, con el objetivo de eliminar estereotipos y promover cambios culturales.
- Asistencia y apoyo a las víctimas: La ley garantiza el acceso a servicios integrales como asesoramiento legal, apoyo psicológico, atención médica y programas de inserción laboral, además de brindar protección especial a los hijos de las víctimas.
- Marco legal y sanciones: La legislación establece un marco jurídico sólido para perseguir y sancionar los diferentes tipos de violencia de género, con penas más severas en casos de feminicidio.

En Costa Rica se encuentra contemplada la Ley Modelo para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Ámbito de las

Relaciones de Pareja o Ex Pareja a través de la Ley 8589, buscando prevenir y sancionar todo acto de violencia efectuado contra una mujer por parte de su pareja actual o pasadas.

Sus objetivos son:

Prevenir y Sensibilizar: Se promueven campañas de sensibilización y educación sobre los derechos de las mujeres y las consecuencias de la violencia.

Medidas de protección: Se establecen órdenes de protección y restricciones de contacto para garantizar la seguridad de las víctimas.

Atención integral a las víctimas: Se brinda asesoramiento jurídico, apoyo psicológico, atención médica y programas de inserción laboral para ayudar a las víctimas en su recuperación.

Sancionar y realizar una persecución de delitos: Se establecen castigos en el ámbito penal para los agresores y se busca una persecución efectiva de los delitos de violencia por la condición de tal, es decir, su género.

CAPITULO III: ANALISIS Y RESULTADOS

Con el fin de lograr los objetivos de desarrollo establecidos, se ha procedido a implementar los instrumentos mencionados en la sección inicial de este documento. El propósito es evaluar cómo el hecho de que las personas afectadas por la violencia de género o familiar violen las medidas de protección concedidas en su favor afecta la reincidencia delictiva o la comisión de nuevos delitos. Para lograr este objetivo, se realizó una encuesta a 15 abogados especializados en Derecho Penal y Derecho de Familia que trabajan en la Jurisdicción de la Corte Superior de Lambayeque. El propósito de la encuesta fue obtener su perspectiva sobre el problema investigado. La muestra utilizada en este estudio tenía las siguientes características:

3.1. Prueba de normalidad

H₀: Los datos de las variables analizadas tienen distribución normal.

H₁: Los datos de las variables analizadas no tienen distribución normal.

Tabla 1

Análisis de normalidad del Auto incumplimiento de las medidas de protección y el incremento de las tasas delictivas

	Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.
Auto incumplimiento de las medidas de protección	0,981	15	0,975
Incremento de las tasas delictivas	0,871	15	0,034

Fuente: Elaboración propia

Según lo que arroja las pruebas de normalidad para las variables auto incumplimiento e incremento de las tasas delictivas, que mediante la prueba de Shapiro-Wilk, al tener este un valor significativo <0.05 respecto a la variable incremento de las tasas delictivas, se infiere que, si una variable no cumple el supuesto de normalidad se analizarán mediante la prueba no paramétrica (Rho de Spearman), concluyendo que, no se acepta la hipótesis nula, es decir, los datos no provienen de una distribución normal.

3.2. En relación al objetivo general de la investigación:

O.G.: Determinar la incidencia entre el auto incumplimiento de las medidas de protección y el incremento de las tasas delictivas en políticas de género.

H1: Existe incidencia entre el auto incumplimiento de las medidas de protección y el incremento de las tasas delictivas en políticas de género.

Tabla 2

Correlación entre auto incumplimiento y el incremento de tasas delictivas

			Auto incumplimiento	Tasas delictivas
Rho de Spearman	Auto incumplimiento	Coeficiente de correlación	1,000	0,753**
		Sig. (bilateral)	.	0,001
		N	15	15
	Tasas delictivas	Coeficiente de correlación	0,753**	1,000
		Sig. (bilateral)	0,001	.
		N	15	15

Fuente: Elaboración propia

Según los resultados de la Tabla 2, se encontró que al aplicar la prueba Rho de Spearman, se obtuvo un valor p de 0.001, el cual es menor que el nivel de significancia establecido (0.05). Por lo tanto, podemos afirmar que la hipótesis

planteada es válida, lo que significa que existe una relación entre el incumplimiento de las medidas de protección y el aumento de las tasas delictivas en las políticas de género. Además, el coeficiente obtenido fue de 0.753, lo cual indica que esta relación es fuerte y positiva.

EN RELACIÓN AL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN:

O.E.1. Analizar las políticas públicas de prevención y lucha contra la violencia familiar y de género en el Perú.

Tabla 3

Distribución de frecuencias respecto a las políticas nacionales e internacionales en la lucha para frenar la violencia contra la mujer

	N	%	% acumulado
Totalmente en desacuerdo	1	6,7	6,7
Ni en desacuerdo ni de acuerdo	6	40,0	46,7
De acuerdo	6	40,0	86,7
Totalmente de acuerdo	2	13,3	100,0
Total	15	100,0	

Fuente: Elaboración propia

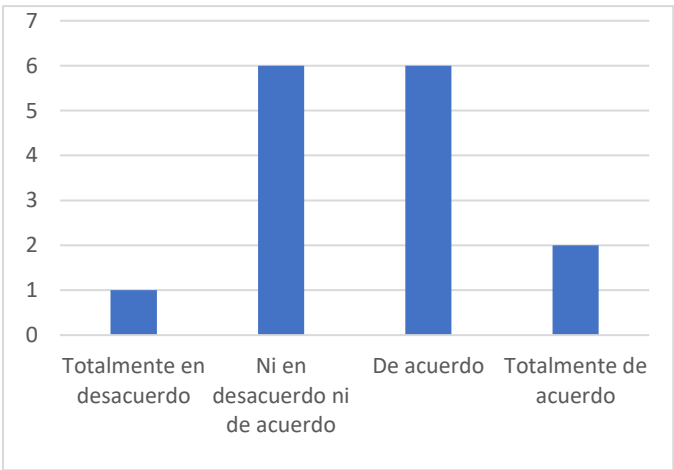


Figura 1. Las políticas nacionales e internacionales en la lucha para frenar la violencia contra la mujer

Según los resultados presentados en la tabla 3 y la figura 1, se pudo observar que de los 15 encuestados, un 13.3% afirmó estar completamente de acuerdo con la idoneidad de las políticas nacionales e internacionales en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Asimismo, el 40.0% expresó estar de acuerdo, mientras que otro 40.0% manifestó no tener una opinión definida al respecto. Por último, el 6.7% mencionó estar en total desacuerdo con las políticas tanto nacionales como internacionales para frenar la violencia contra las mujeres.

Tabla 4

Distribución de frecuencias respecto a la protección que brinda la Ley n.º 30364 a las mujeres víctimas de violencia

	N	%	% acumulado
Totalmente en desacuerdo	1	6,7	6,7
En desacuerdo	1	6,7	13,3
Ni en desacuerdo ni de acuerdo	7	46,7	60
De acuerdo	5	33,3	93,3
Totalmente de acuerdo	1	6,7	100,0
Total	15	100,0	

Fuente: Elaboración propia

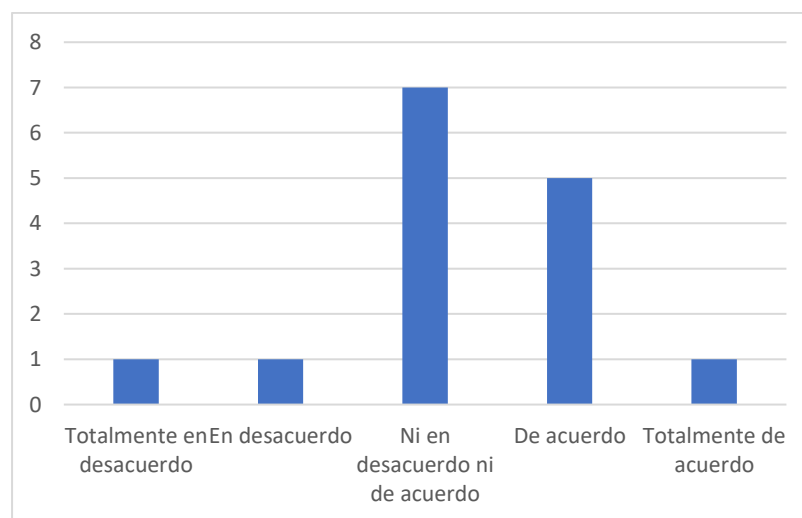


Figura 2. Protección que brinda la Ley n.º 30364 a las mujeres víctimas de violencia

Según los datos de la tabla 4 y la figura 2, se pudo observar que, de un grupo de 15 encuestados, un pequeño porcentaje, específicamente el 6.7%, manifiesta una oposición total a afirmar que la protección otorgada por la Ley n.º 30364 a las mujeres que sufren violencia sea adecuada y apropiada para ese propósito. Del mismo modo, una cantidad igual indica estar en desacuerdo. Además, el 46.7% sostiene que no se encuentra ni en desacuerdo ni de acuerdo, mientras que el 33.3% expresa estar de acuerdo. Por último, un 6.7% considera que la protección brindada por la Ley n.º 30364 a las mujeres víctimas de violencia es la mejor y la más adecuada para garantizar su seguridad.

3.3. En relación al segundo objetivo específico de la investigación:

O.E.2. Analizar la figura de las medidas de protección, así como las razones de su incumplimiento en la región Lambayeque.

Tabla 5

Distribución de frecuencias respecto al tratamiento de las medidas de protección dictadas

	N	%	% acumulado
Totalmente en desacuerdo	1	6,7	6,7
En desacuerdo	3	20,0	26,7
Ni en desacuerdo ni de acuerdo	7	46,7	73,3
De acuerdo	3	20,0	93,3
Totalmente de acuerdo	1	6,7	100,0
Total	15	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

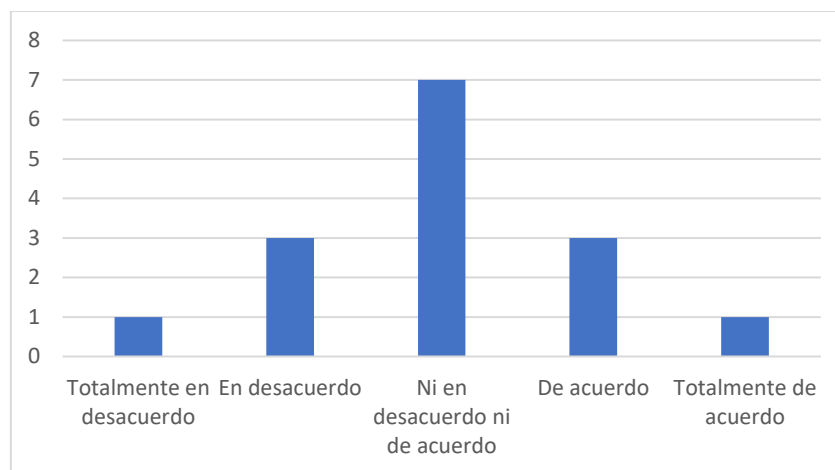


Figura 3. Tratamiento de las medidas de protección dictadas

Según los datos de la tabla 5 y la figura 3, se pudo observar que de los encuestados totales (15), un pequeño porcentaje del 6.7% expresó su total desacuerdo con el enfoque dado a las medidas de protección establecidas por la Ley n.º 30364. Por otro lado, un 20.0% manifestó su desacuerdo con el tratamiento brindado a dichas medidas. Un 46.7% se situó en una posición neutral, ni en desacuerdo ni de acuerdo, mientras que un 20.0% se mostró de acuerdo. Por último, un 6.7% consideró que el tratamiento de las medidas de protección dictadas por la Ley n.º 30364 es adecuado para su propósito.

Tabla 6

Distribución de frecuencias respecto al acompañamiento interdisciplinario adecuado a las medidas de protección brindadas a las mujeres víctimas de violencia

	N	%	% acumulado
Totalmente en desacuerdo	1	6,7	6,7
En desacuerdo	5	33,3	40,0
Ni en desacuerdo ni de acuerdo	5	33,3	76,3
De acuerdo	4	26,7	100,0
Total	15	100,0	

Fuente: Elaboración propia

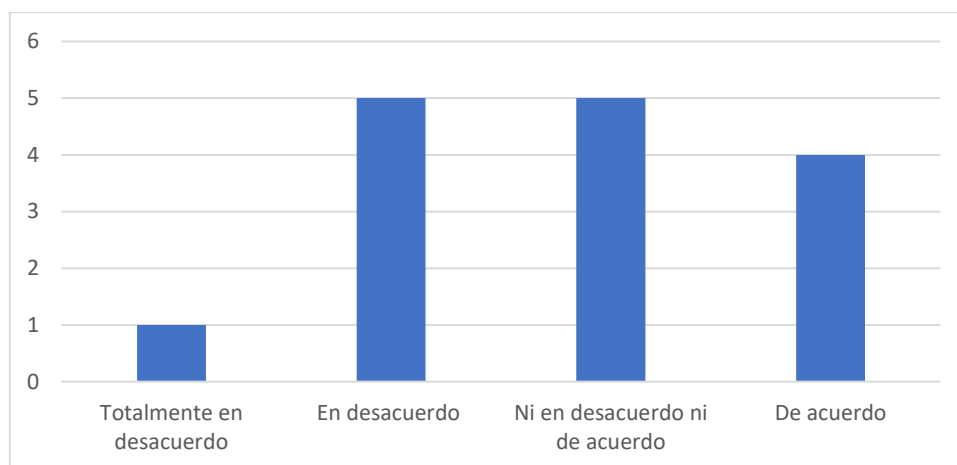


Figura 4. *Acompañamiento interdisciplinario adecuado a las medidas de protección brindadas a las mujeres víctimas de violencia*

De acuerdo a los datos presentados en la Tabla 6 y la Figura 4, se puede observar que, dentro de un conjunto de 15 participantes encuestados, el 26.7% expresa su conformidad respecto a la adecuación del apoyo interdisciplinario a las medidas de protección ofrecidas a las mujeres que sufren violencia. Por otro lado, el 33.3% de los encuestados mantiene una posición neutral, es decir, ni están de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que otro 33.3% manifiesta estar en desacuerdo. Por último, el 6.7% de los encuestados asegura estar totalmente en desacuerdo con la afirmación de que el apoyo interdisciplinario a las medidas de protección proporcionadas a las mujeres víctimas de violencia es adecuado para ayudarlas a superar la experiencia vivida y la dependencia emocional que tienen hacia sus agresores.

Tabla 7

Distribución de frecuencia respecto al auto incumplimiento de las medidas de protección por parte de las víctimas

	N	%	% acumulado
En desacuerdo	2	13,3	13,3
Ni en desacuerdo ni de acuerdo	3	20,0	33,3
De acuerdo	6	40,0	73,3
Totalmente de acuerdo	4	26,7	100,0
Total	15	100,0	

Fuente: Elaboración propia

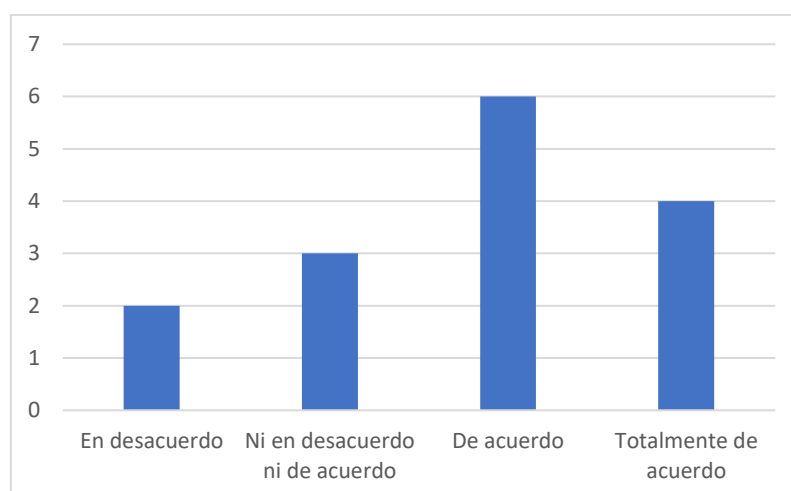


Figura 5. *Auto incumplimiento de las medidas de protección por parte de las víctimas*

De acuerdo a los datos presentados en la Tabla 7 y la Figura 5, se pudo observar que, de los encuestados que conforman la muestra total (15 personas), aproximadamente una cuarta parte (26.7%) expresó su total conformidad con la afirmación de que la falta de cumplimiento de las medidas de protección por parte de las víctimas representa un elemento que aumenta el riesgo de reincidencia delictiva o de cometer un nuevo delito. Por otro lado, el 40% manifestó estar de acuerdo con esa declaración. Además, un 20.0% afirmó no tener una postura

definida, ya que no estaban ni en desacuerdo ni de acuerdo. Por último, el 13.3% de los participantes consideró que el incumplimiento de las medidas de protección por parte de las víctimas no constituye un factor de riesgo.

Tabla 8

Distribución de frecuencia respecto al auto incumplimiento de las medidas de protección por parte de las víctimas obedece a un incorrecto acompañamiento estatal a dichas medidas

	N	%	% acumulado
En desacuerdo	3	20,0	20,0
Ni en desacuerdo ni de acuerdo	6	40,0	60,0
De acuerdo	4	26,7	86,7
Totalmente de acuerdo	2	13,3	100,0
Total	15	100,0	

Fuente: Elaboración propia

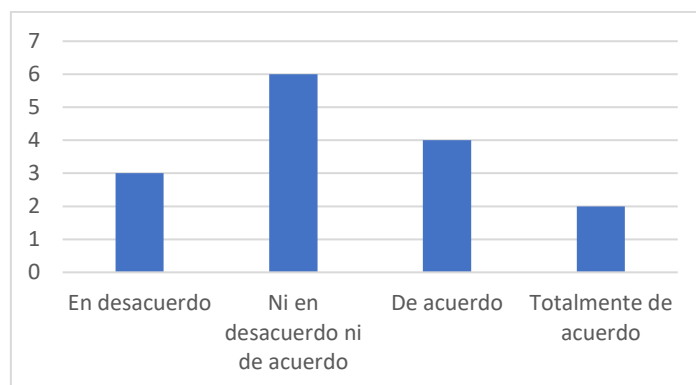


Figura 6. *Auto incumplimiento de las medidas de protección por parte de las víctimas*

De acuerdo a los datos proporcionados en la Tabla 7 y la Figura 6, se pudo observar que, dentro de la muestra total de personas encuestadas (15), un pequeño porcentaje del 13.3% expresó su total acuerdo con la premisa de que la falta de cumplimiento de las medidas de protección por parte de las víctimas es consecuencia de una asistencia estatal inadecuada. Por otro lado, el 26.7% manifestó estar de acuerdo

con esta afirmación, mientras que el 40.0% indicó no tener una posición definitiva al respecto. Por último, el 20.0% expresó su desacuerdo con la idea de que el incumplimiento de las medidas de protección por parte de las víctimas sea resultado de una asistencia estatal inapropiada.

Tabla 9

Distribución de frecuencia respecto a la incidencia del delito previo

	N	%	% acumulado
Totalmente en desacuerdo	1	6,7	6,7
Ni en desacuerdo ni de acuerdo	3	20,0	26,7
De acuerdo	6	40,0	66,7
Totalmente de acuerdo	5	33,3	100,0
Total	15	100,0	

Fuente: Elaboración propia

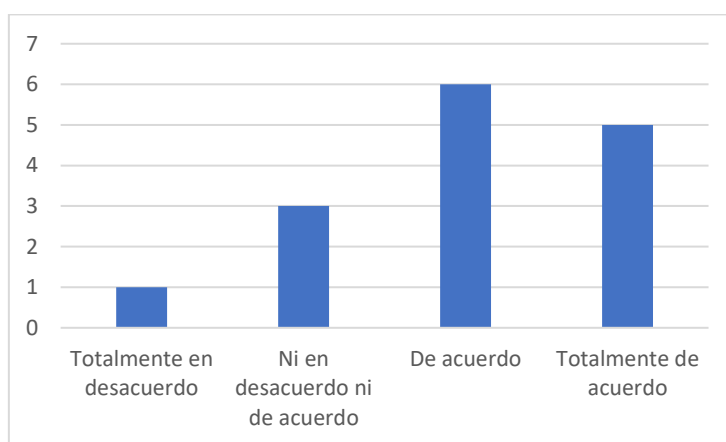


Figura 7. *Incidencia del delito previo*

Basándome en la información proporcionada en la tabla 8 y la figura 7, se observa que, de un grupo total de encuestados (15 personas), un tercio (33.3%) manifiesta estar en pleno consenso con respecto a la afirmación de que las mujeres que son víctimas de violencia tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de un delito adicional o un delito de mayor gravedad. Por otro lado, un 40.0% indica estar de acuerdo con dicha declaración, mientras que un 20.0% expresa una postura neutra,

sin manifestarse ni a favor ni en contra. Finalmente, un 6.7% manifiesta estar en total desacuerdo con la premisa de que las mujeres víctimas de violencia son más susceptibles de ser objeto de un nuevo delito o un delito más grave.

3.4. Confiabilidad del instrumento

Tabla 10

Estadísticas de fiabilidad

Coeficiente	Relación
0	Nulo
]0.1, 0.3]	Muy baja
]0.3, 0.5]	Baja
]0.5, 0.7]	Regular
]0.7, 0.8]	Aceptable
]0.8, 0.99]	Elevado
1	Perfecta

Alfa de Cronbach	N de elementos
0.645	8

Fuente: Hernández et al. (2012). Metodología de la Investigación Científica.

Según la evaluación de los datos, se puede confirmar que el dispositivo en discusión muestra una confiabilidad moderada, al obtener un coeficiente de 0.645. Por lo tanto, se concluye que la fiabilidad del mencionado dispositivo es del 64.5%.

CAPITULO IV: CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

4.1. Discusión de resultados

Se presenta la discusión de los hallazgos alcanzados en este estudio, tomando en cuenta la información previa proporcionada en el marco teórico pertinente, las leyes aplicables tanto a nivel nacional como internacional, y las opiniones coincidentes en el tema. Luego, se lleva a cabo dicho proceso de manera coherente con los objetivos establecidos, a partir de los cuales se formulan las conclusiones correspondientes.

4.1.1. En relación al objetivo general de investigación: Establecer los factores que influyen en el incumplimiento de las medidas de protección y el incremento de las tasas delictivas en políticas de género.

Según lo expuesto previamente en el capítulo anterior, de acuerdo con la opinión de los expertos legales afiliados a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, nuestra legislación presenta elementos que desempeñan un papel importante en la conexión entre la falta de cumplimiento de las medidas de protección por parte de las víctimas de delitos de género o violencia familiar y el incremento de los índices delictivos asociados a estos actos, tal como se ilustra en la Tabla 02 de nuestra investigación.

No obstante, esta realidad, no siempre supone un mal accionar de las víctimas, sino que puede estar supeditada a diversos factores, destacando entre ellos el tratamiento que reciben por las autoridades al momento de interponer su denuncia, o el acompañamiento que puedan recibir por equipos especializados que les permitan superar el nivel de dependencia que puedan sentir frente a su agresor.

Ante ello, hay que señalar que el incumplimiento de dichas medidas se da también en ocasiones, producto de la retrasada acción de la justicia, debido a la excesiva carga procesal con la que cuentan los despachos fiscales o judiciales, que impiden realizar un correcto seguimiento de las víctimas y su real estado, con el fin de asegurarse no estén siendo víctimas nuevamente de agresiones físicas o psicológicas que pongan en gran riesgo su integridad. Tal y como podemos apreciar la Tabla 7.

Esta significancia, debe entenderse en conjunto con el tratamiento de los objetivos específicos de la investigación, cuya discusión se presenta a continuación.

4.1.2. En relación al primer objetivo específico de investigación: Explicar las políticas públicas de prevención y lucha contra la violencia familiar y de género en el Perú.

En nuestro ordenamiento jurídico la política estatal vigente en la lucha contra la violencia familiar y de género, se encuentra representada en la Ley n.º 30364, Ley para erradicar, prevenir y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, la cual prevé para dichas poblaciones vulnerables una esfera de protección legal que les asegure una protección integral, una salvaguarda de sus derechos e igualdad de oportunidades.

Para ello, la protección que propone esta ley, no solo engloba un enfoque legal, sino supone un trabajo multidisciplinario en el que diversas instituciones encargadas del tratamiento de la violencia familiar o de género en nuestro país, jueguen un rol preponderante, apoyándose en un enfoque

de género, intercultural, humanístico generacional desde una perspectiva de interseccionalidad e integralidad.

En relación a lo mencionado anteriormente, se puede observar que la ley en cuestión contempla la implementación de medidas de protección para mujeres que han sufrido actos de violencia. El objetivo es brindarles el apoyo necesario para superar la experiencia traumática y reducir su dependencia hacia quienes las agreden. Como resultado, se busca reducir los riesgos asociados a la convivencia entre víctima y agresor, con el fin de prevenir la ocurrencia de nuevos delitos de igual o mayor gravedad.

Adicional a ello, a efectos de complementar estos avances en la protección de las mujeres y en la lucha por erradicar todo tipo de violencia en su contra, se consideró aplicar políticas penales de naturaleza restrictiva, que buscaba no solo endurecer las penas por los delitos de género, sino también suprimir los beneficios procesales a los que podía acogerse los sujetos activos de dichos delitos.

Bajo ese orden de ideas, en el 2017 se promulgó la Ley n.º 30710 que proponía las suspensiones de penas privativas de la libertad para condenados por el delito de lesiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, en función a los delitos contenidos en el artículo 122 y 122-B del Código Penal.

En el mismo sentido, en el año 2018 se emitió el Decreto Legislativo n.º 1382, el cual señalaba la inaplicación de los beneficios procesales de la confesión sincera o reducción de pena por terminación anticipada en el caso

del delito contenido en el artículo 108-B del Código Penal, esto es, el feminicidio.

No obstante, según la información obtenida de la base teórica de nuestra investigación, la situación actual es desalentadora. Según las estadísticas proporcionadas por el Portal Estadístico del Programa Nacional Aurora, que se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el año 2021, se han registrado 136 casos de feminicidio y 239 casos de intento de asesinato a nivel nacional. Estos datos han llevado a que análisis como el informe Global Law and Order 2021 de GALLUP (2021) nos sitúen en el sexto lugar en términos de percepción de inseguridad a nivel mundial. Esta percepción se atribuye a la inadecuada política gubernamental en relación a los altos niveles de violencia y feminicidios.

Situación que se condice con los resultados obtenidos por la presente investigación, en tanto, conforme se establece en las Tablas 3 y 4 de la presente investigación, la percepción general es que no se está dando un correcto tratamiento a las figuras procesales establecidas para prevenir y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, situación que puede obedecer a que estemos dejando de lado quizá el primero de estos conceptos, la prevención, para centrarnos solamente en la sanción, situación que lleva a que las causas del problema subsistan y tengamos que lamentar cada vez más nuevos actos de violencia. Realidad que se condice con la investigación de Aguayo, (2020), recogida como antecedente en la presente investigación, en el cual concluye que la violencia de género no es más que una expresión de inequidad entre mujeres y hombres, obedeciendo a una violencia estatuida en nuestra sociedad, y que

puede manifestarse de diversas formas, entre ellas la comisión de delitos como el feminicidio, aun cuando este quede en grado de tentativa, siendo estos, los últimos escalones de un sistema de violencia que inicia con pequeñas agresiones, muchas veces normalizadas o mal atendidas por las autoridades en un momento pertinente.

4.1.3. En relación al segundo objetivo específico de investigación: Analizar la figura de las medidas de protección, así como las razones de su incumplimiento en la región Lambayeque.

De acuerdo con los argumentos previos expuestos, con el fin de salvaguardar de manera más efectiva los derechos de las mujeres que han sido víctimas de violencia familiar o de género, nuestra legislación ha establecido la implementación de medidas de protección. Estas medidas se otorgan como consecuencia de la presentación de una denuncia relacionada con la comisión de tales delitos, siempre y cuando los jueces consideren que es necesario hacerlo, basándose en la existencia de un nivel de riesgo moderado o grave, según lo determinen los informes de evaluación de riesgo llevados a cabo por los Centros de Emergencia Mujer al momento de la denuncia.

En dicho sentido, el Decreto Supremo n.º 004-2020, MIMP que aprueba el TUP de la Ley n.º 30364 señala en su artículo 32 que toda medida de protección tiene por objeto minimizar o neutralizar los efectos nocivos que produce un acto de violencia en su víctima, en tal sentido también es objeto de la dación de una medida de protección, garantizar que la víctima pueda continuar con el desarrollo de sus actividades cotidianas de forma normal,

asegurando su integridad física y mental y buscando suprimir las posibilidades de un nuevo hecho violento.

De igual forma, podemos rescatar la posición del Tribunal Constitucional en la sentencia n.º 3378-2019, en la cual al referirse a las medidas de protección, resalta su naturaleza cautelar y sus efectos de temporalidad, en tanto las mismas deberán perder efecto al cesar la amenaza o el riesgo a la integridad de las beneficiadas, destacando además que durante el proceso de otorgamiento de medidas de protección deberán quedar prohibidos todos los actos que busque una confrontación o reconciliación entre víctima y victimario, evitando así supuestos de revictimización o toma de decisiones inoportunas en contextos de dependencia emocional. En dicho sentido, el artículo 22 de la ley número 30364, prevé los siguientes tipos de medidas de protección: i) Retiro del agresor del domicilio, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la víctima y evitar la generación de un riesgo para una nueva agresión o un delito mayor; ii) Prohibición de acercarse o tener contacto con la víctima en los términos que señale la autoridad, con la finalidad de evitar amenazas, insultos u la producción de un nuevo hecho violento; iii) Impedimento de comunicarse por cualquier medio informático o epistolar; iv) Prohibición de portar o poseer armas, debiendo realizarse la comunicación a la Superintendencia Nacional de control de servicios de seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil a efectos de que retiren los permisos con los que haya contado el agresor y v) Inventario sobre sus bienes, a efectos de evitar supuestos de violencia económica a las víctimas o dejarla en un estado de necesidad o dependencia.

Conforme se tiene conocimiento las medidas de protección tienen por objeto la protección integral de las mujeres víctimas de violencia, pero no solo basta con su aprobación, sino que deben de estar complementadas con un acompañamiento estatal solido que permita a las víctimas de estos actos violentos, continuar con el desarrollo de su vida.

En dicho sentido, en el Perú y Lambayeque se aprecia que una de las principales causas de incumplimiento de las medidas de protección por parte de las propias víctimas es el estado de dependencia que pueden presentar frente a sus agresores, lo cual conforme se establece en las Tablas 6 y 7 supone un factor de riesgo derivado del nulo o deficiente acompañamiento estatal e interdisciplinario del Estado para frenar tales violencias; aseveración que se condice con lo expresado por (Fiestas Ascate, 2019), quien nos presenta una investigación en la que aborda el incumplimiento de las medidas de protección propiciado por las propias víctimas a efectos de determinar si ello constituiría una autopuesta en peligro y por lo tanto un eximente de la responsabilidad penal, llegando a concluir que tal situación no puede ser aceptada en nuestra legislación, en tanto el incumplimiento al que se hace referencia en muchas oportunidades obedece a una mala práctica legislativa en el acompañamiento a las víctimas de este tipo de delitos, exponiéndolas a nuevos actos de violencia de igual o mayor naturaleza.

4.1.4. En relación al tercer objetivo específico de investigación: Sugerir la creación de una nueva política pública de prevención y lucha contra la violencia familiar y de género en el Perú a efectos de evitar el incremento en dichos índices.

A raíz de las deficiencias evidentes en el tratamiento legal de la violencia de género y la violencia intrafamiliar en nuestra legislación, así como la falta de apoyo adecuado a las medidas de protección otorgadas a las mujeres que son víctimas de estos delitos por parte del Estado, lo cual perpetúa su dependencia de los agresores y aumenta el riesgo de futuros episodios de violencia de igual o mayor gravedad, es absolutamente necesario establecer nuevas políticas de prevención y erradicación de la violencia doméstica.

Un primer lineamiento que debe contener esta propuesta es la conformación del equipo interdisciplinario que permita el tratamiento de las víctimas de violencia a efectos de superar sus niveles de dependencia, en tal sentido, este equipo debe estar compuesto por profesionales de psicología, asistentes sociales y personal policial, los cuales deben de desplegar terapias que permitan a las víctimas recuperarse y superar el supuesto de agresiones.

Estos equipos interdisciplinarios, no actuarán solamente a efectos de evaluar a la víctima al momento de la denuncia, sino deberán verificar el acatamiento de la medida de protección y brindar correctos monitoreos a efectos de detectar a tiempo riesgos que supongan nuevos supuestos de agresión o más víctimas dentro de la familia del agresor.

Un segundo lineamiento, deberá estar centrado en el respaldo estatal en función a las evaluaciones que realice el equipo interdisciplinario de la realidad en la que se encuentran las víctimas o menores que dependan de ellos, pudiendo trabajar de forma conjunta con albergues o casas de recojo temporal en donde víctimas y familiares puedan acudir a efectos de superar los efectos que produce la violencia en ellos.

Finalmente, consideramos que un tercer lineamiento a plantear deberá establecerse en función al potenciamiento de dispositivos de naturaleza electrónicos como el aplicativo Botón del Pánico a efectos de facilitar la detención inmediata de supuestos de riesgo y poder brindar apoyo y soporte oportuno a las víctimas en casos de una nueva agresión; claro está facilitando a las víctimas la comprensión sobre estos aplicativos y la factibilidad de su empleabilidad en todos los dispositivos móviles.

4.2. Propuesta legislativa

PROYECTO DE LEY N.º

**SUMILLA: PROYECTO DE LEY QUE
REGULA EL ACOMPAÑAMIENTO
ESTATAL INTERINSTITUCIONAL A LAS
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
OTORGADAS A MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA FAMILIAR, EN EL MARCO
DE LA LEY N.º 30364.**

Jorge David Emanuel Diaz Mino, ejerciendo el Derecho de Iniciativa Legislativa que confiere al artículo n.º 107 de la Constitución Política del Perú, y conforme a lo establecido en los artículos n.º 75º y 76º del Reglamento del Congreso de la Republica, presento la siguiente propuesta legislativa:

**“Proyecto de ley que regula el acompañamiento estatal
interinstitucional a las medidas de protección otorgadas a mujeres
víctimas de violencia familiar, en el marco de la Ley N.º 30364”**

I. Exposición de motivos

En nuestro ordenamiento jurídico la política estatal vigente en la lucha contra la violencia familiar y de género, se encuentra representada en la Ley n.º 30364, Ley para erradicar, prevenir y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, la cual prevé para dichas poblaciones vulnerables una esfera de protección legal que les asegure una protección integral, una salvaguarda de sus derechos e igualdad de oportunidades.

Para ello, la protección que propone esta ley, no solo engloba un enfoque legal, sino supone un trabajo multidisciplinario en el que diversas instituciones encargadas del tratamiento de la violencia familiar o de género en nuestro país, jueguen un rol preponderante, apoyándose en un enfoque de género, intercultural, humanístico generacional desde una perspectiva de interseccionalidad e integralidad.

Es en ese sentido, que dicha ley prevé la aplicación de medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia que supongan una ayuda para que las mismas puedan superar la experiencia traumática sufrida, así como la posible dependencia que tengan con su agresor, y en base a ello disminuir los riesgos que supone la convivencia víctima-agresor, para la comisión de un nuevo delito de igual o mayor naturaleza.

Adicional a ello, a efectos de complementar estos avances en la protección de las mujeres y en la lucha por erradicar todo tipo de violencia en su contra, se consideró aplicar políticas penales de naturaleza restrictiva, que buscaba no solo endurecer las penas por los delitos de género, sino también suprimir los beneficios procesales a los que podía acogerse los sujetos activos de dichos delitos.

Bajo ese orden de ideas, en el 2017 se promulgó la Ley n.º 30710 que proponía las suspensiones de penas privativas de la libertad para condenados por el delito de lesiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, en función a los delitos contenidos en el artículo 122 y 122-B del Código Penal.

En el mismo sentido, en el año 2018 se emitió el Decreto Legislativo n.º 1382, el cual señalaba la inaplicación de los beneficios procesales de la

confesión sincera o reducción de pena por terminación anticipada en el caso del delito contenido en el artículo 108-B del Código Penal, esto es, el feminicidio.

No obstante, como se ha recogido de la información contemplada en el marco teórico de nuestra investigación, el panorama actual es todo menos alentador, según cifras proporcionadas por el Portal Estadístico del Programa Nacional Aurora, (2021), adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se registraron 136 casos de feminicidio y 239 casos de tentativa a nivel nacional, lo que nos ha llevado a que análisis como el realizado por GALLUP, (2021) en su informe Global Law and Order 2021, nos cataloguen como el sexto país con mayor percepción de inseguridad en el mundo, debido a la incorrecta política estatal para frenar tales índices de violencia y feminicidios.

Conforme se tiene conocimiento las medidas de protección tienen por objeto la protección integral de las mujeres víctimas de violencia, pero no solo basta con su aprobación, sino que deben de estar complementadas con un acompañamiento estatal solido que permita a las víctimas de estos actos violentos, continuar con el desarrollo de su vida.

En dicho sentido, en el Perú y Lambayeque se aprecia que una de las principales causas de incumplimiento de las medidas de protección por parte de las propias víctimas es el estado de dependencia que pueden presentar frente a sus agresores, lo cual conforme se establece en las Tablas 6 y 7 supone un factor de riesgo derivado del nulo o deficiente acompañamiento estatal e interdisciplinario del Estado para frenar tales violencias; aseveración que se condice con lo expresado por (Fiestas

Ascate, 2019), quien nos presenta una investigación en la que aborda el incumplimiento de las medidas de protección propiciado por las propias víctimas a efectos de determinar si ello constituiría una autopuesta en peligro y por lo tanto un eximente de la responsabilidad penal, llegando a concluir que tal situación no puede ser aceptada en nuestra legislación, en tanto el incumplimiento al que se hace referencia en muchas oportunidades obedece a una mala práctica legislativa en el acompañamiento a las víctimas de este tipo de delitos, exponiéndolas a nuevos actos de violencia de igual o mayor naturaleza.

En base a las deficiencias que se pueden apreciar en el tratamiento de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en nuestro ordenamiento jurídico y el poco acompañamiento a las medidas de protección otorgadas a las mujeres víctimas de tales delitos por parte del estado, propiciando que subsistan los niveles de dependencia que puedan presentar frente a sus agresores, y se eleve el riesgo de la producción de nuevos episodios de violencia en igual o mayor intensidad; resulta pues imperante poder establecer nuevas políticas de prevención y lucha contra la violencia familiar.

Un primer lineamiento que debe contener esta propuesta es la conformación del equipo interdisciplinario que permita el tratamiento de las víctimas de violencia a efectos de superar sus niveles de dependencia, en tal sentido, este equipo debe estar compuesto por profesionales de psicología, asistentes sociales y personal policial, los cuales deben desplegar terapias que permitan a las víctimas recuperarse y superar el supuesto de agresiones.

Estos equipos interdisciplinarios, no actuarán solamente a efectos de evaluar a la víctima al momento de la denuncia, sino deberán verificar el acatamiento de la medida de protección y brindar correctos monitoreos a efectos de detectar a tiempo riesgos que supongan nuevos supuestos de agresión o más víctimas dentro de la familia del agresor.

Un segundo lineamiento, deberá estar centrado en el respaldo estatal en función a las evaluaciones que realice el equipo interdisciplinario de la realidad en la que se encuentran las víctimas o menores que dependan de ellos, pudiendo trabajar de forma conjunta con albergues o casas de recojo temporal en donde víctimas y familiares puedan acudir a efectos de superar los efectos que produce la violencia en ellos.

Finalmente, consideramos que un tercer lineamiento a plantear deberá establecerse en función al potenciamiento de dispositivos de naturaleza electrónicos como el aplicativo Botón del Pánico a efectos de facilitar la detención inmediata de supuestos de riesgo y poder brindar apoyo y soporte oportuno a las víctimas en casos de una nueva agresión; claro está facilitando a las víctimas la comprensión sobre estos aplicativos y la factibilidad de su empleabilidad en todos los dispositivos móviles.

II. Fórmula legal

1. Se plantea la incorporación del artículo 22-A de la Ley n.º 30364, bajo las siguientes características:

ARTÍCULO 22-A. ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección establecidas en el artículo precedente, deberá conformarse

un equipo multidisciplinario que permita acompañar a las víctimas a superar los actos de violencia y dependencia que puedan presentar frente a sus agresores, debiendo estos estar conformados por:

1. (01) Un profesional de psicología destinados por los CEM a efectos de brindar soporte y apoyo a las víctimas de manera oportuna e inmediata.
2. (01) Un profesional asistente social destinado por los CEM a efectos de verificar las condiciones del ambiente en donde va a permanecer la víctima del delito, así como identificar la posible existencia de más víctimas de actos de violencia.
3. (02) Dos efectivos policiales encargados del acompañamiento a la víctima, verificar el cumplimiento y acatamiento de las medidas de protección, así como brindar apoyo u oportuno ante la ocurrencia de un nuevo supuesto de violencia.

El equipo multidisciplinario presentado, deberá elaborar un informe en el que se establezca las condiciones de la víctima, la identificación de nuevas víctimas, así como las acciones a desplegar para prevenir nuevos actos de violencia.

Adicional a ello, se podrá requerir al órgano jurisdiccional, se ubique temporalmente a la víctima o víctimas en albergues o centros de recojo a efectos de garantizar la protección de su integridad y permitirle superar satisfactoriamente los niveles de dependencia que pueda presentar frente a su agresor.

III. Análisis costo beneficio (Análisis económico del Derecho)

La presente propuesta, si bien es cierto va a requerir la elaboración de nuevos lineamientos y propuestas en las búsqueda por erradicar toda forma de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, suponiendo bajo obvias consideraciones un gasto estatal considerable, el mismo se encontrará justificada en función a los fines que se plantean de la misma, atendiendo a las exigencias internacionales de regular dentro de nuestro ordenamiento, todas aquellas medidas necesarias e idóneas a efectos de prevenir y sancionar todas formas de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

CONCLUSIONES

1. Se determinó un nivel alto y significativo de influencia del incumplimiento de las medidas de protección y el incremento de las tasas delictivas en políticas de género ello derivado del incorrecto acompañamiento estatal a las mujeres víctimas de violencia familiar, a efectos de superar la violencia sufrida y los índices de dependencia que presentan con sus agresores, lo que supone que el incorrecto accionar del Estado deriva en una exposición a las víctimas frente a un nuevo delito, circunstancia que en muchas oportunidades deviene en un desenlace fatal.
2. Se ha logrado explicar las políticas públicas de prevención y lucha contra la violencia familiar y de género en el Perú, destacando que las mismas se encuentran bajo enfoques de género, intercultural, humanístico generacional desde una perspectiva de interseccionalidad e integralidad, que aseguren la salvaguarda de su integridad física y mental, aunque en los últimos años producto de los constantes reproches social al Estado por su ineficacia en dicha labor, estas políticas se han centrado más en la sobre criminalización, incremento desmedido de políticas punitivas y la reducción de beneficios, factores si bien importantes derivados más de un interés sancionador que preventivo.
3. Se ha logrado analizar la figura de las medidas de protección, así como las razones de su incumplimiento en la región Lambayeque, destacándose que los principales niveles de incumplimiento se relacionan con el estado de dependencia que pueden presentar las víctimas frente a sus agresores, lo cual supone un factor de riesgo derivado del nulo o deficiente acompañamiento estatal e interdisciplinario del Estado, este nivel de dependencia puede presentarse tanto desde el aspecto socioeconómico, emocional, familiar o de otra

índole, que muchas veces puede llevar a la normalización de actos de violencia en contra de las mujeres por sus parejas.

4. Se propone la implementación de una nueva política pública de prevención y lucha contra la violencia familiar y de género en el Perú a efectos de evitar el incremento en dichos índices, mediante la regulación del artículo 22-A de la Ley n.º 30364, promoviendo la creación de equipos de acompañamientos interdisciplinarios que permitan un mejor acompañamiento a las víctimas de violencia, procurando con ello brindarles un soporte a la par de la dación de una medida de protección, permitiéndoles superar en todo o en parte la dependencia que sufren hacía sus agresores y con ello previniendo la posibilidad de la comisión de un nuevo delito violento en su contra.

RECOMENDACIONES

1. Como recomendación teórica del presente trabajo de investigación se considera necesario que se profundice en la investigación de la incidencia del auto incumplimiento de las medidas de protección y la reincidencia e incremento delictivo de los delitos de violencia familiar o de género y el rol del Estado, en la prevención de dichos supuestos mediante el acompañamiento a las víctimas desde una perspectiva integral.
2. La recomendación metodológica que se presenta es la posibilidad de replicar la investigación realizada a nivel nacional a efectos de tomar en consideración las diversas formas de acompañamiento estatal a las víctimas de violencia y la identificación de buenas prácticas orientadas a dicho propósito que merezcan su potenciamiento y replicación.

REFERENCIAS

- Aguayo Zurita, Estefanía. (2020). Tentativa De Feminicidio: Una Encrucijada Entre Muerte E Impunidad. *Mundos Plurales - Revista Latinoamericana De Políticas Y Acción Pública* 7 (1), 79 - 96.
<https://doi.org/10.17141/mundosplurales.1.2021.4086>.
- Añi Quispe, K. T. (2021). Determinación de criterios unificadores en el feminicidio para lograr un mejor tratamiento de los factores de riesgo (Chiclayo, 2016-2020). Obtenido de: <https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/8322>.
- Arias González (2020). Técnicas e instrumentos de investigación científica: Enfoques consulting EIRL. Arequipa, Perú: Enfoques Consulting EIRL
- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (25 de abril de 2007). Ley Nª 8589: Penalización de la Violencia contra las Mujeres.
<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2007/5206.pdf?view=1>
- Carrasco Julca, J. A. (2022). Medidas de protección previstas en la Ley No 30364 y su incidencia en la reducción de casos de feminicidio en el 1º Juzgado de familia del distrito judicial de Lima Este, año 2019. Perú. Obtenido de: <http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/handle/upa/1688>.
- Castro Esquivel, D. A. E., & Rodriguez Coz, C. K. (2021). El Feminicidio y la Inadecuada Protección del Estado para proteger a las Víctimas del Departamento de Junín del año 2017-2018. Google Académico. Perú. Obtenido de: <http://www.repositorio.upla.edu.pe/handle/20.500.12848/3160>.
- Cevallos Noblecilla, Luis Arturo. (2021). La violencia de género y su incidencia en el delito de feminicidio, Aplicación en el Distrito Judicial de Tumbes 2018-2019.

Universidad Nacional de Tumbes, Tumbes. Obtenido de <http://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/2410>.

Cisneros, A et al. (2022) Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos que apoyan a la Investigación Científica en tiempo de Pandemia. Revista científica Dominio de las ciencias, 8 (1), 1165-1185. <http://dx.doi.org/10.23857/dc.v8i41.2546>

Cochachin Vargas, Y. (2022). Violencia contra la mujer y su relación con el delito de feminicidio en el Distrito Judicial de Ancash 2021. Universidad Cesar Vallejo, Trujillo. Obtenido de https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/80415/Cochachin_VYM-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Cruz Castellón, S. (2020). El feminicidio como forma de violencia contra la mujer (Caso: Institución Voces Libres, periodo 2019). Obtenido de: <http://ddigital.umss.edu.bo:8080/jspui/handle/123456789/17436>.

Defensoría del Pueblo. (2021). Balance sobre la política pública contra la violencia hacia las mujeres en el Perú (2015-2020). Obtenido de <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/11/Balance-sobre-la-pol%C3%ADtica-p%C3%BAblica-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-en-el-Per%C3%BA.pdf>.

Echegaray Gálvez, M. Y. (2018). Ineficacia de las medidas de protección en la prevención del feminicidio. (Tesis de maestría en Derecho Penal). Universidad Nacional Federico Villarreal, Escuela Universitaria de Posgrado, Lima, Perú https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/2289/ECHERGA_RAY%20GALVEZ%20MAGALI%20YRMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Escobal (2021). La violencia familiar y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del 5to año del nivel secundario de la I.E. Túpac Amaru II, Pachitea. (Tesis de licenciatura en Educación, especialidad: Lengua y Literatura). Universidad Nacional Hermilio Valdizán. <https://repositorio.unheval.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13080/7397/TEPR00039E77.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Fiestas, L. A. (2019). El incumplimiento de las medidas de protección propiciado por la víctima en los delitos de violencia familiar como eximente de responsabilidad (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Piura, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Piura, Perú <https://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/2138/DER-FIE-ASC-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

GALLUP (2022). Global Law and Order 2021. Portal Institucional Gallup. Washintong. Obtenido de: <https://www.gallup.com/analytics/356963/gallup-global-law-and-order-report.aspx>.

Guerrero Paz, Mariana. (2021). Medidas cautelares en el delito de violencia familiar en la modalidad de violencia física a mujeres y su repercusión en el delito de feminicidio. Google Académico / Repositorio Universidad Iberoamericana León. México. Obtenido de: <https://epikeia.iberoleon.mx/numeros/43/medidas-cautelares-violencia-familiar-feminicidio.pdf>

Guevara, A. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción), Revista científica del mundo de la investigación y el conocimiento, 4 (3), <http://recimundo.com/index.php/es/article/view/860>

Guevara (2022). Violencia por omisión. En Derecho Penal I (211). Universidad de San Carlos de Guatemala. <https://www.studocu.com/gt/document/universidad-de-san-carlos-de-guatemala/derecho-penal-i/violencia-por-omision/36688524>

Guillermo Haro (2019). El delito de feminicidio. Violencia contra la mujer por machismo y misoginia. Google Académico. Perú. Obtenido de: <https://www.derechopenalenlared.com/libros/el-delito-de-feminicidio-haro.pdf>.

Hopkins Barriga, A., Soria Morales, C., Ajito Lam, E., Montalván Lume, J., & Ascue Yendo, R. (2019). Guía de investigación en Arte y Diseño. Pontificia Universidad Católica del Perú. Vicerrectorado de Investigación – VRI. Dirección de Gestión de la Investigación – DGI. Lima, Perú. <https://cdn02.pucp.education/investigacion/2016/06/12214732/guia-de-investigacion-en-diseno.pdf>

Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI - (2021). Perú, Feminicidio y Violencia contra la Mujer 2015-2020. Portal Web INEI. Perú. Obtenido de: <https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2022/03/Peru-Feminicidio-y-Violencia-contra-la-Mujer-2015-2020.pdf>.

Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. (2022). Nota de Prensa: 54,9% de mujeres de 15 a 49 años de edad fue víctima de violencia familiar alguna vez en su vida por parte del esposo o compañero. Obtenido de <https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-prensa-no-187-2022-inei.pdf>

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2004.
<https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf>

López et al (2021). La entrevista y la encuesta: ¿Métodos o técnicas de indagación empírica? Revista de Investigación Educativa, 39(2), 427-444.

Minchán Crisóstomo, L. F. (2018). Las políticas de prevención del Plan Nacional contra la violencia hacia la mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y su relación con el feminicidio. Perú. Obtenido de:
<https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/13055>.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables. (2022). Casos con características de Feminicidio – 2021 Perú. Portal Aurora. Perú. Obtenido de:
<https://portalestadistico.aurora.gob.pe/formas-de-la-violencia-2021/>.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables. (2022). Casos de tentativa de Feminicidio – 2021 Perú. Portal Aurora. Perú. Obtenido de:
<https://portalestadistico.aurora.gob.pe/formas-de-la-violencia-2021/>.

Ministerio de Salud. (2022). CDC Perú reportó más de 17 mil casos por violencia contra la mujer durante el 2022. Obtenido de
<https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/informativo/prensa/cdc-peru-reporto-mas-de-17-mil-casos-por-violencia-contr-la-mujer-durante-el-2022/>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2013). Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Violencia sexual. Edición en español: Organización Panamericana de la Salud:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98821/WHO_RHR_12.37_spa.pdf;sequence=1

Organización de Estados Americanos. (1994). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención De Belém Do Pará". Portal Oficial de la Organización de Estados Americanos. Obtenida de: <https://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp#:~:text=La%20Convenci%C3%B3n%20Interamericana%20para%20Prevenir,a%20la%20violencia%20como%20una>.

Pizarro (2017). Naturaleza jurídica de las medidas de protección en un proceso de violencia familiar (Tesis de licenciatura en Derecho). Universidad de Piura. Facultad de Derecho. Programa Académico de Derecho. Piura, Perú. https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2913/DER_097.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Trujillo Malpartida, L. Y. (2022). Causas del incremento del delito de feminicidio en Huánuco 2016–2018. Obtenido de: <http://repositorio.udh.edu.pe/handle/123456789/3306>.

Rico Gil, D. M. (2022) Eficacia de las medidas de protección frente a la violencia basada en género ¿Antesala de riesgo de feminicidio? Colombia. Obtenido de: <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/42580>.

Stanford Childrens Health. (20 de noviembre de 2019). Violencia Familiar. Obtenido de Stanford Childrens Health:

<https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=domesticviolence-85-P04668>

Naciones Unidas. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Nueva York, Naciones Unidas, 1993.

Zapata Caballero, E. M. (2022). La violencia familiar y su asociación con el delito de feminicidio, segunda fiscalía penal corporativa de Nuevo Chimbote, 2021. Perú.

Obtenido de: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/85163>.